



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



Tesis

**Un control judicial de imputación en la formalización de investigación
preparatoria para garantizar el ejercicio del derecho de defensa**

Autora:

Bach. Osores Perales Leydi Yassira

Asesora:

Mag. Colina Moreno Mary Isabel

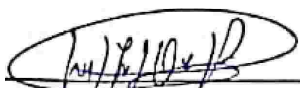
Para optar el título profesional de Abogada

Fecha de sustentación:

23 de febrero del 2024

Lambayeque, 2024

Tesis: “Un control judicial de imputación en la formalización de investigación preparatoria para garantizar el ejercicio del derecho de defensa”, presentada para optar el título profesional de Abogada, por:



Bach. Osores Perales Leydi Yassira
Autora




Mag. Colina Moreno Mary Isabel
Asesora

Aprobada por:

Lambayeque, viernes 23 de febrero del 2024



Mag. CARLOS MANUEL MARTÍNEZ OBLITAS
Presidente del Jurado



Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO
Secretario del Jurado



Abog. CÉSAR VARGAS RODRIGUEZ
Vocal del Jurado.

Dedicatoria

A Dios por protegerme y ser guía constante en mi camino y a mis padres por su amor, motivación, apoyo incondicional y por haberme enseñado el camino para crecer como persona y profesional.

Agradecimiento

A mis padres y hermanas por su valioso apoyo y consejos y a mi asesora por su participación y colaboración desinteresada, gracias a ellos se hizo posible esta investigación.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 17-2024-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de: **Leydi Yassira Osores Perales**.

Siendo las 4:00 p.m. del día viernes 23 de febrero del 2024 se reunieron en la Sala de simulación de audiencias I de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**UN CONTROL JUDICIAL DE IMPUTACIÓN EN LA FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA**", designados por Resolución N° 296-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 07 de octubre del 2022, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Mag. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS.
SECRETARIO : Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO.
VOCAL : Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

La tesis fue asesorada por Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO, nombrada por Resolución N°296-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 07 de octubre del 2022.

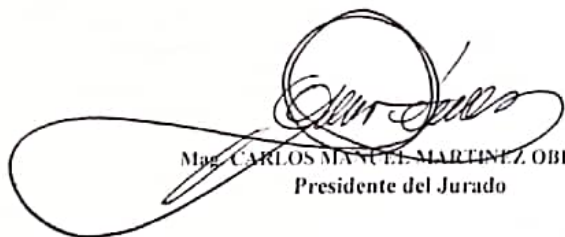
El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° 68-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 02 de febrero del 2024.

La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Leydi Yassira Osores Perales** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADA con la nota de 17 (DIECISIETE) en la escala vigesimal, mención de BUENO.

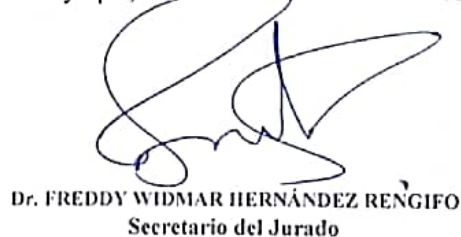
Por lo que queda APTA para obtener el Título Profesional de ABOGADA, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 4:58 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, viernes 23 de febrero del 2024



Mag. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado



Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO
Secretario del Jurado



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Vocal del Jurado.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación de la bachiller en DERECHO Leydi Yassira Osores Perales, Titulada UN CONTROL JUDICIAL DE IMPUTACIÓN EN LA FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 18% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 20 de noviembre del 2023



Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO

DNI: 40997649

ASESOR



Bach. Leydi Yassira Osores Perales

DNI: 48204949

Autora

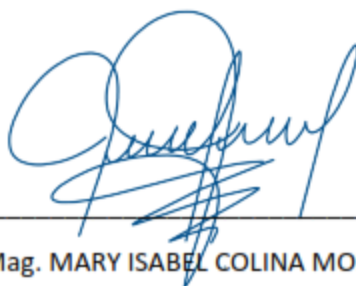
Un control judicial de imputación en la formalización de investigación preparatoria para garantizar el ejercicio del derecho de defensa.

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%	18%	4%	4%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	5%
2	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	3%
3	qdoc.tips Fuente de Internet	2%
4	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	2%
5	img.lpderecho.pe Fuente de Internet	1%
6	repositorio.upao.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	idoc.pub Fuente de Internet	1%
8	repositorio.upagu.edu.pe Fuente de Internet	<1%



Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO

DNI: 40997649

ASESOR

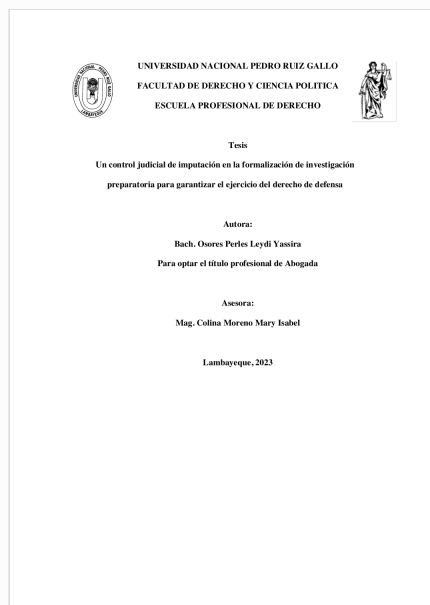


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Leydi Yassira Osores Perles
Título del ejercicio: Quick Submit
Título de la entrega: Un control judicial de imputación en la formalización de inv...
Nombre del archivo: TESIS_OSORES_PERALES_LADY.docx
Tamaño del archivo: 112.58K
Total páginas: 87
Total de palabras: 17,853
Total de caracteres: 96,892
Fecha de entrega: 20-nov.-2023 10:26a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 2234219862



Derechos de autor 2023 Turnitin. Todos los derechos reservados.



Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
DNI: 40997649
ASESOR

Índice general

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice general	v
Índice de tablas.....	ix
Resumen	x
Abstract	xi
Introducción	12
Capítulo I.....	16
Los aspectos metodológicos de la investigación.....	16
1.1. El planteamiento del problema de investigación.....	17
1.2. La formulación del problema	19
1.3. La justificación de la investigación	19
1.4. La importancia de la investigación.....	21
1.5. Los objetivos de la investigación	22
1.5.1. El objetivo general.....	22
1.5.2. Los objetivos específicos	22
1.6. La hipótesis de la investigación.....	22
1.7. Las variables de la investigación.....	22
1.7.1. Sobre la variable independiente.....	22

1.7.2. Sobre la variable dependiente	22
1.8. Los métodos aplicados en la investigación	23
1.8.1. El método de interpretación exegetica	23
1.8.2. El método de interpretación jurídica sistemática	23
Capítulo II	25
La formalización de investigación preparatoria y el control judicial	25
2.1. Los trabajos previos a la investigación	25
2.2. Fundamentos de la formalización de la investigación preparatoria	28
2.3. Los parámetros del control judicial en el proceso penal	32
Capítulo III	35
El derecho de defensa en el proceso penal	35
3.1. El derecho de defensa.....	35
3.2. El contenido de protección de la defensa procesal.....	39
3.3. La defensa técnica en el proceso penal	40
Capítulo IV	47
Análisis de los resultados	47
4.1. Unidad de análisis	47
4.2. Resultados del análisis de resoluciones de formalización de investigación preparatorias.....	48
Capítulo V	57
Contrastación de la hipótesis.....	57

5.1. La discusión de los resultados	57
5.1.1. Sobre la discusión del objetivo específico: “Estudiar los fundamentos de la formalización de investigación preparatoria que justifiquen el control judicial”	58
5.1.2. Sobre la discusión del objetivo específico: “Describir doctrinariamente el contenido esencial del derecho de defensa para asegurar su ejercicio en el proceso penal”	64
5.1.3. Sobre la discusión del objetivo específico: “Analizar la realidad procesal respecto a la limitación del derecho de defensa por la ausencia de control judicial en la formalización de investigación preparatoria”	66
5.1.4. Sobre la discusión del objetivo específico: “Proponer la creación de un mecanismo procesal para el control judicial de la defensa técnica en la formalización de la investigación preparatoria”	69
5.2. Validación de las variables	74
5.2.1. Validación de la variable independiente: “El control judicial en la formalización de investigación preparatoria”	74
5.2.2. Validación de la variable dependiente: “El ejercicio del derecho de defensa”	75
5.3. Contrastación de la hipótesis	78
5.3.1. Determinación final	78
5.3.2. Contrastación de la hipótesis	78
Conclusiones	79
Conclusión general	79

Conclusiones específicas.....	79
Recomendaciones.....	81
Bibliografía.....	83

Índice de tablas

Tabla 1: evaluación sobre el control del derecho a la defensa técnica en las resoluciones de formalización de investigación preparatoria	48
--	----

Tabla 2: cuadro de la contrastación de la hipótesis con la determinación final de la investigación.....	78
---	----

Resumen

De acuerdo a la principal meta, esta tesis buscó determinar si la ausencia de control judicial en la formalización de investigación preparatoria limita el ejercicio del derecho de defensa, lo cual se ha logrado a través de la aplicación del método de interpretación jurídica, basado principalmente en la evaluación de la literalidad de las reglas que delimitan el derecho de defensa esto es mediante la exégesis, así como también se aplicó el método de la interpretación sistemática de tales reglas para verificar su enlace con el control que ejerce la normativa constitucional, lo cual ha permitido la verificación del sentido garantista que debe predominar en el proceso penal.

La evaluación antes señalada se ha complementado con el método de observación en el que participó el análisis de los casos en que la participación judicial respecto al control se encuentra insuficiente en tanto que no se genera como elemento previo a la resolución que formaliza la investigación preparatoria, por tal razón ante la advertencia de un problema al que se suma la ausencia de control respecto a la defensa técnica, se pretende condicionar la ampliación del control de garantías para que se instaure en esta fase para dotarla de protección adecuada de los derechos del imputado así como del debido proceso.

Palabras Clave: Control judicial, Formalización de investigación preparatoria, Derecho de defensa.

Abstract

According to the main goal, this thesis sought to determine if the absence of judicial control in the formalization of preparatory investigation limits the exercise of the right of defense, which has been achieved through the application of the legal interpretation method, based mainly on The evaluation of the literality of the rules that delimit the right of defense is through exegesis, as well as the method of systematic interpretation of such rules was applied to verify their link with the control exercised by constitutional regulations, which has allowed the verification of the guarantee meaning that must predominate in the criminal process.

The aforementioned evaluation has been complemented with the observation method in which the analysis of cases in which judicial participation with respect to control was involved is insufficient since it is not generated as an element prior to the resolution that formalizes the preparatory investigation. For this reason, given the warning of a problem to which is added the absence of control regarding the technical defense, it is intended to condition the expansion of the control of guarantees so that it is established in this phase to provide it with adequate protection of the rights of the accused as well. as due process.

Keywords: Judicial control, Formalization of preparatory investigation, Right of defense.

Introducción

El título de “Un control judicial de imputación en la formalización de investigación preparatoria para garantizar el ejercicio del derecho de defensa”, se ha generado con la unión de dos conceptos jurídicos enlazados por una relación causal, esto es que la investigadora percibió al control judicial como una condición ausente en el ámbito de la formalización de la investigación, tal situación se entiende tiene efectos producidos sobre la secuencia de procedimientos que incorpora la existencia del proceso que investiga las acciones delictivas dado que se estaría afectando la garantía de los derechos fundamentales apreciando con especial atención a la defensa como derecho en su manifestación de la defensa técnica.

Debe comprenderse que esta última como ejecución del derecho a la defensa ha de estar garantizada cuando menos respecto a su control, esto es que se verifique de manera previa la idoneidad con la que actúa el letrado que ejerce la defensa, ello se refiere a que la responsabilidad de efectuar dicha verificación debe estar irrogada a los magistrados que participan en la investigación, sobre todo respecto a los jueces que verifican el nivel de garantismo de la investigación. Es así como la principal razón de la propuesta se deriva de la seguridad jurídica que ostenta la estructura jurídica del ordenamiento penal.

Para la corroboración de esta postura se ha diseñado una ruta de trabajo que se incorpora en el Capítulo Primero referido a la metodología que utiliza el estudio, es así que se parte por el planteamiento del problema en el que se ha descrito la realidad procesal que se observó en las investigaciones que han sido formalizadas

y no se aprecia una adecuada motivación del control requerido. Como producto de esta indicación es que se ha construido un cuestionamiento que es el enunciado sobre la problemática de la tesis y se indicó: ¿De qué manera la ausencia del control judicial en la formalización de investigación preparatoria limita el ejercicio del derecho de defensa?

Bajo la línea lógica que diseña la investigación y en base a la recopilación de información previa al desarrollo de la tesis, se concibió una postura inicial que se plasma en la hipótesis de la investigación e indica: La ausencia del control judicial en el momento en que se haya de formalizar la fase preparatoria de la investigación penal lo cual limita el ejercicio de la defensa como derecho.

Tal cual se ha podido apreciar en el conjunto de elementos básicos se encuentran participando las variables mediante la vinculación causal antes advertida, lo que también permitió establecer rutas para el desarrollo de la tesis, en tal sentido se plasma el objetivo general bajo la siguiente indicación: Determinar si la ausencia de control judicial en la formalización de investigación preparatoria limita el ejercicio del derecho de defensa.

Del mismo modo se consideraron metas específicas en función a cada una de las variables para establecer la ruta de análisis lo cual se indicó de la siguiente manera: Estudiar los fundamentos de la formalización de investigación preparatoria que justifiquen el control judicial, Describir doctrinariamente el contenido esencial del derecho de defensa para asegurar su ejercicio en el proceso penal, Analizar la realidad procesal respecto a la limitación del derecho de defensa por la ausencia de

control judicial en la formalización de investigación preparatoria, Proponer la creación de un mecanismo procesal para el control judicial de la defensa técnica en la formalización de la investigación preparatoria.

Bajo esta guía metodológica se pudo concretar el análisis proyectado haciendo uso además de los métodos de la interpretación jurídica aplicado sobre las reglas que intervienen en este campo de análisis, esto es sobre el diseño procesal que rige la investigación en el campo de la lucha contra la ilicitud penal, específicamente la que pauta el esquema de la etapa de investigación preparatoria, así como la normativa constitucional en tanto regente del control jurídico para la aplicación del derecho a través de los principios como reglas ut supra.

El resultado de la ejecución de lo antes señalado se diseñó a través de los capítulos correspondientes, tal es el caso del Capítulo Segundo que se ocupó de evaluar los contenidos teóricos sobre la necesidad de que exista una fase que conlleve a formalizar el desarrollo de los actos de investigación para reconocer o preparar el camino hacia la certeza de los hechos y conseguir la verdad como meta del proceso penal, y verificar si se produce el control judicial, en cuyo desarrollo se ha incorporado la evaluación de los trabajos previos, esto es los antecedentes que se han seleccionado como base de la investigación a fin de establecer una nueva ruta de examen de la realidad y con ello una propuesta específica.

Además de ello se ha logrado incorporar la base teórica relacionada con los fundamentos que orientan la formalización de la investigación preparatoria con lo cual se ha podido advertir además de su naturaleza jurídica y la correcta

justificación de su existencia en el esquema; también permitió reconocer los factores que promueven el control judicial y la necesidad de que se establezcan pautas específicas que ostentan el correcto manejo de la investigación de parte de los magistrados así como de las partes intervinientes en él.

También como parte de la recopilación teórica se diseñó la estructura del Capítulo Tercero que se ocupó de la descripción del derecho de defensa en el ordenamiento jurídico partiendo desde su perspectiva de protección constitucional hasta llegar a la verificación de su contenido esencial trasladado al proceso penal en los ámbitos de protección material y formal, identificando con ello la condición ejecutiva de este derecho que se reconoce a la defensa técnica como labor idónea de los letrados que se ocupan del patrocinio especialmente del imputado.

La recopilación de información que se incorpora en el Cuarto Capítulo se hace en base a la unidad de análisis plasmada para luego establecer un resultado que mediante la estructura del Capítulo Quinto se contrasta, dicha labor se distribuyó sobre la discusión respecto de los contenidos de cada uno de los capítulos para obtener una toma de postura, sobre la cual se validaron las variables obteniendo como resultado la determinación final de la investigación, lo cual se contrasta con la hipótesis inicial para ser trasladada luego a la construcción de las conclusiones y los planteamientos finales como recomendación de la tesis.

La Autora.

Capítulo I

Los aspectos metodológicos de la investigación

En esta parte de la investigación se describe de manera puntual toda la estructura que forma parte del diseño metodológico que ha servido de ruta para ejecutar la tesis, así se da inicio con el planteamiento problemático, mediante el cual se describe la percepción de una condición de ausencia o insuficiente control judicial sobre lo que representa el derecho de defensa del imputado, cuando falla la defensa técnica y no es advertida por la judicatura permitiéndose así la vulneración de este derecho.

Seguidamente se plantearon las razones que impulsan la investigación que parten desde el punto de vista social en tanto que interesa asegurar el carácter garantista del proceso penal a fin de lograr una condición idónea de seguridad jurídica en el sistema de justicia y con ello incrementar el nivel de confianza de la ciudadanía. También se tuvo en cuenta una justificación netamente jurídica, que plantea la existencia de control adecuado de la defensa en su ejecución como defensa técnica, dado que su ausencia tiene como resultado el traslado del proceso a fases donde la falta de intervención del letrado no permitió asegurar el derecho.

Además de la importancia que se vincula directamente con la justificación del problema, se han establecido las metas tanto general, así como la específica en base a las variables de investigación, que permitió asumir una postura inicial sobre la hipótesis. Toda esta formación temática se ha dado en base a la participación de los métodos aplicados, como son el de interpretación exegética así como el de

interpretación sistemática de la reglas que intervienen en la fase del proceso penal estudiada.

1.1. El planteamiento del problema de investigación

Atendiendo a la concepción del derecho de defensa como garantía incorporada en el proceso penal peruano, se advierte de este último un problema en la etapa de formalización de investigación preparatoria; la realidad de sistema de justicia afecta procesalmente la adecuada percepción de los hechos facticos cuyo traslado al ámbito jurídico resulta insuficiente.

Esta percepción se vincula con la necesidad de encontrar la verdad como el principal de los objetivos del proceso de investigación penal, que desde luego se relaciona con la función de la prueba, que permite reconocer la manera en que se han suscitado los hechos en la realidad que circunda a la acción delictiva. Tal cual se indica en la doctrina el sentido de buscar la verdad en la investigación penal “(...) se realiza por medio del discurso de la racionalidad, el cual se basa en el cumplimiento estricto de la motivación de las resoluciones judiciales”. (Zamora Acevedo, 2014, pág. 178)

Es posible, en función de lo recogido textualmente, señalar la importancia que representa el carácter de la motivación en la construcción de las decisiones judiciales, puesto que, para el caso del derecho penal, las sentencias implican una determinación que involucra a los derechos de las personas que participan en el proceso en calidad de inculpadas. Al vincularse tal hecho con la verdad en el proceso de investigación penal, se concibe como tal su finalidad, pero no se ha

logrado precisar de manera clara lo que comprende dicho concepto, por lo cual deberá hacer uso de la interpretación de las propias reglas que forman parte del ordenamiento jurídico, orientando tal observación como una crítica constructiva en favor del sentido garantista del derecho penal.

Ello se advierte en razón de las dificultades al momento de establecer un criterio objetivo para consolidar una imputación concreta, condición que altera el sentido de seguridad jurídica que se supone debe ofrecer el derecho penal y su proceso. Para tal caso ha de considerarse que existen pautas reguladas en la norma que se orientan por esta teoría, así pues la imputación bajo la condición de objetividad hace referencia más allá de “(...) la determinación de la tipicidad de la conducta, sino que también ofrece reglas para precisar que, luego que se haya afirmado que la conducta es típica, en qué supuestos el resultado producido puede ser imputado a la conducta (imputación objetiva del resultado o imputación objetiva en sentido estricto)”. (Villavicencio, 2007, pág. 269)

Tal cual se indica el sentido de esta evaluación de la realidad implica la necesidad de una explicación clara respecto a las resultas de la acción que se presume como ilícita, lo cual únicamente habrá de vincularse dichos resultados con la actividad en tanto se trate de un elemento que lo determina causalmente, con lo cual se obtiene el sentido de trascendente, si es que conjuntamente con la acción tipificada se presenta algún tipo de condición alternativa para su evaluación como es el caso de una cuestión accidental o la participación de la acción de otra persona.

La descripción de esta circunstancia procesal es el punto de partida para el análisis que se proyecta en esta investigación, para lo cual se tendrá en cuenta los

factores no normativos y subjetivos que participan para alcanzar la condición sobre la presunta responsabilidad de la gente. Los factores que se desprendan del análisis permitirán crear una ruta de solución respecto a los efectos vulneratorios del derecho a la defensa, más aún teniendo en cuenta que tal garantía presenta dificultades para su consagración, ello debido a su relación con el aspecto subjetivo y personal que representa su carácter técnico, toda vez que no existe un parámetro exacto de intervención que permita su control.

Se pretende con el resultado de esta evaluación de carácter idóneo que se presume de la fase de formalización de investigación preparatoria que sugerirá la intervención normativa de parte del estado para viabilizar el control de los elementos que promueven la vulneración de la defensa técnica.

1.2. La formulación del problema

¿De qué manera la ausencia del control judicial en la formalización de investigación preparatoria limita el ejercicio del derecho de defensa?

1.3. La justificación de la investigación

El desarrollo de la presente investigación obtiene su justificación en el ámbito social como origen de la estructura jurídica, ello en tanto que las necesidades públicas orientan la construcción de la normativa jurídica. En tal sentido se puede decir que socialmente se ha proyectado el enfoque de este trabajo en tanto se observa una situación de insatisfacción de parte de la colectividad respecto al nivel de confianza que se tiene en el sistema de justicia, con especial atención a la seguridad jurídica que brinda el proceso penal.

La falta de certeza a la que se hace referencia trae consigo un problema de efectividad respecto a uno de los pilares del desarrollo de las investigaciones, que es el derecho de defensa que en ocasiones se aprecia como vulnerado. Esta condición es la que se entiende debiera ser protegida en el nivel más trascendente de la investigación que es precisamente la formalización de esta, donde se aprecian debilidades respecto al derecho a la defensa por la ausencia de control adecuado.

Es en este ámbito que se reconoce otra de las justificaciones que se concentra en el ámbito jurídico que interesa centralmente a esta tesis proyectada, así pues, el control de la actividad jurisdiccional en la etapa de la formalización de la investigación estará a cargo del magistrado del poder judicial que evaluará cuan adecuado es el planteamiento de acusación requerida por el Fiscal. Es en esta fase que conviene regular adecuadamente como condición de exigencia puntual, el control del derecho de defensa para asegurar el nivel técnico de este ejercicio, atendiendo al hecho de que el imputado es ignorante a este tipo de conocimiento, corresponderá al magistrado realizar acciones jurídicamente válidas para asegurar la defensa idónea del imputado.

Esta condición jurídica requiere ser reforzada por el principio de legalidad, por lo mismo que deberá crearse un espacio jurídico normativo adecuado para lograr satisfacer esta ausencia de control jurídico durante la etapa de formalización de la investigación. En tal sentido conviene revisar en esta investigación los elementos posibles que otorguen viabilidad jurídica a la propuesta para implementar pautas legales que orienten la actividad de control de la acusación en la fase de investigación preparatoria.

1.4. La importancia de la investigación

Según lo explicado en la justificación del problema, es posible reconocer el nivel de importancia de este planteamiento, en tanto que existe un sentido social de necesidad que proyecta la creación de pautas jurídicas a fin de establecer mayor control en la actividad jurisdiccional. Además de ello, es importante reseñar que esta proyección permite revisar los niveles de ineficacia que se está obteniendo respecto al ejercicio del derecho de defensa técnica por parte de los imputados en el proceso penal, sobre todo atendiendo al principio de presunción de inocencia que les corresponde ser atendido en base a la normativa constitucional.

También es importante la investigación propuesta en tanto que la consecuencia de su aporte tendrá como beneficiario absoluto a los miembros integrantes de la sociedad que conforma el interés a proteger por el Estado; además será de beneficio y utilidad para el imputado en el proceso penal que se encuentra ignorante del conocimiento jurídico para poder establecer si la defensa técnica que le asiste es la más adecuada.

1.5. Los objetivos de la investigación

1.5.1. El objetivo general

Determinar si la ausencia de control judicial en la formalización de investigación preparatoria limita el ejercicio del derecho de defensa.

1.5.2. Los objetivos específicos

- Estudiar los fundamentos de la formalización de investigación preparatoria que justifiquen el control judicial.
- Describir doctrinariamente el contenido esencial del derecho de defensa para asegurar su ejercicio en el proceso penal.
- Analizar la realidad procesal respecto a la limitación del derecho de defensa por la ausencia de control judicial en la formalización de investigación preparatoria.
- Proponer la creación de un mecanismo procesal para el control judicial de la defensa técnica en la formalización de la investigación preparatoria.

1.6. La hipótesis de la investigación

La ausencia del control judicial en la formalización de investigación preparatoria limita el ejercicio del derecho de defensa.

1.7. Las variables de la investigación

1.7.1. Sobre la variable independiente

El control judicial en la formalización de investigación preparatoria.

1.7.2. Sobre la variable dependiente

El ejercicio del derecho de defensa.

1.8. Los métodos aplicados en la investigación

De acuerdo con el sentido del planteamiento de la investigación que se orienta a determinar si la ausencia de control judicial en la formalización de investigación preparatoria limita el ejercicio del derecho de defensa, es que se ha estructurado un esquema de evaluación de la realidad a través de los métodos de la investigación científica. Para el caso de las investigaciones jurídicas como esta se han enfocado los métodos desde el punto de vista de interpretación de las normas jurídicas.

1.8.1. El método de interpretación exegetica

El utilizar este método de investigación se proyecta sobre la observación de las reglas debido a su contenido literal con el fin de reconocer el sentido de esta, esto ha sido de utilidad respecto a las normas procesales que diseñan el control que se ha de ejercer sobre la formalización de la investigación, sobre todo en la etapa en la que se concentra el tema en el rigor de la convicción sobre la responsabilidad del hecho delictivo.

1.8.2. El método de interpretación jurídica sistemática

Lo que se pretende con este tipo de interpretación es verificar la vinculación que tienen las reglas jurídicas con la normativa constitucional, esto es con el afán de controlar el respeto del carácter fundamental que distingue a los derechos y principios de la constitución así como el orden social y política estatal. Es así que se consolida un efecto de viabilidad para su ejecución y sobre todo la efectividad de la legislación. En tal sentido para esta investigación se desarrolló como elemento de importancia, la interpretación de las reglas procesales que determinan la fase del

proceso de investigación preparatoria, verificando con ello que existe un tema limitado respecto a la función de control que el sistema de justicia debería tener y ejercer sobre la labor jurisdiccional.

Esta observación interpretativa ha permitido ver que tal ausencia de control o insuficiencia de este se orienta hacia un resultado de vulneración de derechos, como es el caso del carácter técnico de la defensa que formando un elemento trascendental del derecho en sí, lo presenta como un elemento de cuidado, por lo mismo que debe ser considerado como responsabilidad del propio sistema de justicia mediante sus operadores la opción de controlar su desarrollo a fin de que alcance los niveles de optimización adecuados.

Capítulo II

La formalización de investigación preparatoria y el control judicial

La estructura que se ha diseñado para este capítulo esta vinculada con la primera meta de la investigación que se orienta básicamente sobre la verificación de los fundamentos que inspiran la formalización de la investigación preparatoria, con la intención de hacer notar la necesidad de que exista un adecuado control de la actividad judicial. En tal sentido se puede señalar que representa un carácter de importancia el hecho de incorporar como primer punto de análisis a los trabajos previos que como tesis se han desarrollado en el ámbito académico, lo cual ha servido de base para dar inicio a esta investigación.

2.1. Los trabajos previos a la investigación

En primer lugar, ha de considerarse la investigación del bachiller Mónica Ocas Salazar (2017), que lleva por título: “El Derecho a la Imputación Necesaria y de Defensa en la Formalización de la Investigación Preparatoria”, trabajo académico presentado para optar el Título Profesional de Abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo; concluyendo en que:

El derecho a la imputación necesaria debe cumplir tres elementos configuradores: Primero, la existencia de un hecho concreto, segundo, la calificación jurídica y por último, la existencia de elementos de convicción; a fin de poner en conocimiento al ciudadano del contenido de la imputación para que este pueda desplegar una adecuada actividad defensiva, toda vez que el imputado solo podrá defenderse de una imputación definida. (pág. 124)

Como se aprecia la discusión que ha desarrollado esta investigación citada, se orienta hacia el sentido de la imputación necesaria, por lo mismo que se considera necesaria la discusión de la misma en base a cuestionamientos como ¿Qué tipo de límites normativos o de criterio jurídico, se evidencia en el desarrollo del proceso penal sobre la imputación necesaria? Además de ello se precisa de un acercamiento a la visión procesal como reconocimiento de pautas de evaluación del vínculo entre hecho y tipo penal, por lo se debe agregar a la discusión de este criterio, la pregunta ¿Cuáles serán las condiciones procesales que se precisan para reconocer el vínculo entre la acción delictiva y la conducta tipificada que se incorpora en la teoría el caso?, todo ello será tratado en la fase de discusión de los resultados de manera pertinente.

También se ha creído conveniente reseñar la investigación de María Luisa Ramírez Cabanillas (2018), tesis titulada: “La Necesidad del Ministerio Público en Formular Imputación Necesaria Desde el Inicio de la Investigación Preliminar”, trabajo académico presentado para optar el Grado de Maestra en Derecho en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres - Lima; concluyendo en que

“(…) aquel que obliga al Ministerio Público a que elabore una acusación de forma clara, precisa y detallando minuciosa y cronológicamente como ocurrieron los hechos; la estructura de una correcta imputación exige la fijación precisa de la modalidad típica (...)”. (pág. 104)

Sobre ello conviene indicar que se presenta como una necesidad jurídica el hecho de que la participación del agente alcance una adecuada individualización en

base al razonamiento de la magistratura, lo cual permite imputar ya demás establecer de manera correcta su nivel de participación de acuerdo a la lesión que produce y como es que se desarrollaron los hechos. Estas serán las bases que permitan establecer al magistrado un fundamento correcto par lograr atribuirle la responsabilidad primero y la sanción después, que desde luego se dará de modo proporcional con el fin de evitar vulneraciones innecesarias.

De igual modo se recoge la investigación de Gladys Liliana Arela Apaza & Ruth Nohemi Choque Ojeda (2018), con su tesis titulada: “Necesidad de una Imputación Concreta como Garantía del ejercicio de Derecho de Defensa en el Distrito Judicial de Arequipa, Año 2018”, trabajo académico presentado para optar el Título Profesional de Abogado por la Universidad Tecnológica del Perú - Arequipa; concluyendo respecto a la imputación concreta y su importancia que es:

“(…) aquella exigencia al representante del Ministerio Público, de realizar una descripción, clara, precisa y circunstanciada del fáctico, a efecto, de garantizar al procesado por una investigación, ejercer válidamente su derecho de defensa para formular una estrategia de defensa”. (pág. 99)

Por último, se cita a la bachiller Jenny Alejandra Gómez Gracia (2015), con la investigación (artículo) titulada: “Derecho a la Defensa Antes y Durante la Audiencia de Formulación de Imputación en el Proceso Penal en Colombia”, trabajo de grado presentado para optar el título de especialista en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar por la Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá); donde concluye que:

El derecho a la defensa es un derecho reconocido en el Art. 29 de la Constitución colombiana, atribuido a todo ciudadano, durante la investigación y juzgamiento, entendida la investigación como aquella que se adelanta desde antes de la apertura de una investigación formal o la audiencia de formulación de imputación; es decir, que desde que se adelantan las primeras averiguaciones sobre la comisión de un hecho delictivo la persona tiene el derecho a la defensa. (pág. 33)

De igual forma, el derecho a la defensa es una garantía ciudadana reconocida por múltiples tratados, pactos y convenios internacionales aprobados por la comunidad internacional para todos los ciudadanos y ratificados por Colombia, las cuales han sido reconocidos por la Corte Constitucional.

2.2. Fundamentos de la formalización de la investigación preparatoria

Ante el problema sobre la disposición de formalización de investigación preparatoria frente a la tutela de derechos, en una conferencia el penalista David Panta (2017), brindada en el Colegio de Abogados de Piura, concluye:

(...) la Corte Suprema ha cerrado sus puertas en cuestión a este tipo de atropellos que antes se podían cuestionar vía tutela, o vía nulidad; entonces los profesionales del Derecho se han visto en la necesidad de buscar argumentos, encontrándose gran mayoría en aceptar que el momento que tiene el fiscal de comunicar, es donde se debe solicitar una audiencia de control para de alguna u otra forma hacer una labor valorativa de control de esa disposición de formalización de investigación preparatoria. (párr. 1)

Esta percepción atenta sin duda, contra los aspectos determinante del control que se ha de establecer en el desarrollo de la investigación penal, los factores de

imposición que se reconocen de las reglas que diseñan el proceso penal tienen injerencia precisa sobre el ejercicio del poder, puesto que el poder que se pretende controlar es precisamente el que otorga el ius puniendi al Estado para aplicar sanciones. Por lo mismo se debe mantener un ámbito de rigor sobre los mecanismos que se han incorporado con el fin de establecer una pauta de revisión u observación de los actos que se desarrollan con el fin de reconocer el nivel de responsabilidad del investigado sin descuidar los aspectos garantistas que le asisten.

Según Panta (2017), “ello con la finalidad de verificar que cumpla las exigencias del Nuevo Código procesal Penal, el cual determina que una disposición de formalización de investigación preparatoria, debe darse basándose a indicios convincentes que tenga el Estado sobre un sujeto” (párr. 7); el Ministerio Público en representación del Estado tiene el deber de describir lo que el inculcado ha hecho, cómo lo ha hecho y por qué sucedió. Por lo tanto, no es posible tener una investigación abierta si es que no se le precisan al sujeto tales requerimientos.

En efecto, como bien se sabe las condiciones de un proceso penal garantista incorpora condiciones de control, como ya se indicó anteriormente, pero esto debe trasladarse a la realidad jurisdiccional de manera permanente; si bien es cierto que la formalización y sus requerimientos en virtud de la presencia de elementos de convicción suficientes, permitirán aperturar formalmente la investigación, se debe mantener una secuencia de actos garantistas, es decir que la actividad jurisdiccional se ciña a las pautas ya establecidas en el ordenamiento. Siendo así, adquiere un nivel de importancia la participación de los indicios en el desarrollo de la teoría del caso por parte del Ministerio Público.

“No se trata de formalizar porque se consiguieron indicios, si se formaliza es porque el fiscal tiene el convencimiento de que más adelante se podrán conseguir elementos de convicción suficientes”. (Salas, 2019) Esta indicación implica mas bien una figura de rigor que debe estar compensada por la actividad correcta de quien tiene a su cargo la obtención de la verdad mediante la prueba en el proceso penal, precisamente esta condición o finalidad de los medios probatorios es lo que proporciona la certeza, mas no las presunciones a las que hace referencia el investigador.

Por lo tanto, de no cumplirse lo anterior, “el Ministerio Público al emitir disposiciones de formalización de la investigación preparatoria, vulnera el derecho de imputación necesaria y de defensa del imputado, al considerar hechos genéricos, globales, deficientes calificaciones jurídicas y elementos de convicción” (Ocas, 2017, págs. 124-125), siendo evidentemente necesario, un control judicial de las disposiciones de formalización de la investigación preparatoria.

Tal vez a lo que hace referencia el investigador en su precisión, es el hecho de que la formalización de la investigación debe ser ampliamente comunicada, que para los casos en los que se revisa ciertas conductas especiales, tendría un efecto poco garantista, dado que en función a las reservas que se plantean límites a los contenidos de las carpetas y expedientes, ello si limitara la acción correcta de la defensa técnica. De otro lado el hecho de que se condicione un control exhaustivo en el tenor de la formalización de la investigación, constituye además de una condición de garantía, una suerte de empatía con el rigor de la investigación penal.

Tomando como muestra el auto aprobatorio de formalización y continuación de la investigación preparatoria contra César José Hinostroza Pariachi y otros, en relación a lo establecido por el Código Procesal Penal, corresponde al juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de la República, dictar en el plazo de cinco días, el auto de aprobación de la formalización de la investigación preparatoria, con citación de las partes.

El citado auto de aprobación constituye una excepcional intervención del órgano jurisdiccional tendiente a determinar si, en efecto, se cumplen los presupuestos procesales y requisitos legales determinantes del procesamiento penal. En esta etapa procesal, se debe controlar la disposición fiscal de formalización y continuación de la Investigación Preparatoria, en cuanto a los siguientes aspectos:

- a) Competencia objetiva.- Según el Art. 99 de la Constitución, los delitos imputados habrían sido cometidos por un alto funcionario en ejercicio de sus funciones, y dentro del plazo máximo de cinco años luego del cese de funciones públicas.
- b) Requisitos de procedibilidad.- se debe verificar, I) Denuncia constitucional por un delito cometido en el ejercicio de las funciones de un alto funcionario y presentada en sede parlamentaria por los Congresistas, el Fiscal de la Nación o por el agraviado del delito; II) Denuncia circunscrita a un plazo de cinco años luego del cese de las funciones públicas; y, III) Resolución acusatoria del congreso de contenido penal.

- c) Respeto de los hechos atribuidos y la tipificación, señalados en la resolución acusatoria del Congreso de la República.

Asimismo, debe verificarse los requisitos de toda disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, establecidos en el Art. 336 del Código Procesal Penal.

2.3. Los parámetros del control judicial en el proceso penal

“El derecho penal se fundamenta en la necesaria tutela de los bienes jurídicos como juicio de valor que cada ordenamiento protege y tiene en la pena el mecanismo oportuno y adecuado, como consecuencia jurídica de posible aplicación para aquel que ha infringido las normas establecidas”. (Medina, 2007, pág. 88)

Es importante señalar la existencia de un control en el desarrollo de la investigación penal tal cual se indica en el artículo 349 del ordenamiento procesal penal peruano “(...) previo traslado del requerimiento a las partes el Juez de la Investigación Preparatoria ejercerá el correspondiente control de acusación pudiendo desestimar el pedido Fiscal cuando concurra alguna de las causales de sobreseimiento, previstas en el artículo 348° NCPP”. (Rodriguez, Ugaz, Gamero, & Schönbohm, 2012, pág. 215)

“De tales características de drasticidad y dureza del control penal se originan los límites a la potestad punitiva del Estado, los que poseen un fundamento político y constitucional a la vez que un fundamento funcional: la necesidad del derecho

penal para proteger bienes jurídicos a través de la prevención general y especial que cumple la sanción penal”. (Novoa, 2007, pág. 192)

“(…) la pena es un instrumento que puede utilizarse con fines muy diversos. Sin embargo, la retribución, la prevención general y la prevención especial no constituyen opciones históricas, sino diversos cometidos que distintas concepciones del Estado han asignado en diferentes momentos al *ius puniendi*”. (Chincoya, 2011, pág. 262)

Lo que se entiende como control punitivo se ejecuta mediante el “(…) poder penal del Estado dirigiéndolo no a la reproducción de la violencia, sino a su reducción, no a la generación de conflictos, sino a su superación a través del medio que representa el derecho”. (Vasconcelos Méndez, 2014, pág. 27)

“Se debe tener a la base de la noción de seguridad el concepto de complejidad de lo social, por tanto, no son efectivas las soluciones simples. Los altos índices de violencia y criminalidad, no se reducirán sólo tematizando estas problemáticas en forma mediática y aumentando la vigilancia policial y la protección de los recintos privados”. (García & Zambrano, 2005)

Parte de la seguridad jurídica que se ha de involucrar en el desarrollo del proceso penal, se basa en el principio de congruencia, el mismo que se vincula con la teoría del caso a fin de poder establecer un sentido de garantía; ello en tanto que “(…) del postulado congruencia y su mala, equivocada, indebida e irresponsable aplicación, puede devenir una condena que eventualmente tenga una privación de la libertad, y con ella las consecuencias propias de su ejecución que no solo deben ser vistas de forma jurídico penal, sino tal vez las más importantes de forma social, familiar e individual”. (Valderrama, 2016, pág. 178)

Esta condición de control se orienta a la verificación de la congruencia respecto a las posturas que se asumen en la construcción de la teoría del caso planteada en la investigación por el representante de los intereses del Estado, lo cual deberá ser observado desde una perspectiva metodológica que incorpora al “(...) método científico: La elaboración de una hipótesis, la cual debe ser sometida a una verificación y, una vez comprobada, por intermedio de la verificación, estamos ante la comprobación de lo que se pretendía demostrar”. (Sánchez, 2020, pág. 14)

Capítulo III

El derecho de defensa en el proceso penal

Conviene indicar que este capítulo se enfoca en el desarrollo de la segunda meta de la investigación, esto es que se busca la teoría necesaria para comprender el sentido de la defensa como derecho e integrante del sistema de justicia penal, con tales funciones destinadas a la protección de los intereses de las partes que integran el proceso penal. Estas concepciones han sido las que permitieron identificar una fase de ejecución de este derecho a la defensa conocido como la defensa técnica que se encuentra atribuida a la función que desempeñan los abogados que asisten sobre todo al imputado en tanto que sus derechos son los que se encuentran en cuestión.

3.1. El derecho de defensa

Ha de considerarse que la concepción de una adecuada defensa para los ciudadanos que acuden al sistema de justicia o dependen de su intervención a fin de reconocer sus derechos o discutir sobre su responsabilidad resulta trascendente dentro del proceso penal, se debe señalar que este derecho tiene doble connotación, por un lado, es reconocido constitucionalmente y también es invocado procesalmente bajo el condicionamiento garantista, puesto que se determina de manera puntual en un esquema legislativo de garantías como es el ordenamiento adjetivo penal, haciendo referencia sobre las facultades que le corresponden al imputado.

Sobre el tema en específico, el hecho de que se encuentre ausente el carácter concreto de la imputación, vulnera directamente a la defensa en tanto se comprenda como derecho y una serie de derechos conexos, “(...) tales como son el derecho a la información, el plazo razonable, el derecho de igualdad de armas, con lo cual se estarían menoscabando derechos importantísimos del imputado, situándolo en una evidente desigualdad dentro de un proceso penal”. (Arela & Choque, 2018, págs. 99-100)

“La imputación concreta debe ser definida y configurada para posibilitar el ejercicio real del Derecho de Defensa materializando una resistencia idónea. Si ella se vulnera también se lesiona el Derecho de Defensa, y al ser expedidas en una disposición fiscal de Formalización de la Investigación Preparatoria deben ser bien especificadas para no vulnerar la debida motivación de las resoluciones judiciales (extendiendo este principio también a Disposiciones Fiscales) observando la tipicidad del hecho para también no vulnerar el principio de legalidad”. (Choquecagua, 2014, págs. 29-30)

Dicho, en otros términos, “(...) la imputación concreta no solo implica la descripción de un hecho, sino que interesa también la modalidad del hecho delictivo cuando sean dos o más imputados, o cuando exista un concurso de delitos” esto debe entenderse como el deber de indicar una precisión puntual o distinción de las condiciones y acciones que desarrollan cada uno de los sujetos que participa en el acto ilícito, que alcanza al nivel de complicidad en la afectación que se pueda producir como lesión del objeto de protección. “No basta con un simple enunciado

de hechos fácticos, sino también requiere el grado de intervención de cada sujeto partícipe del hecho delictivo”. (Castillo, 2007, pág. 137)

Por su parte, el autor Mendoza (2015), define la imputación concreta, como: “(...) aquella función que tiene el Ministerio Público en realizar la atribución a una persona natural, un hecho punible, construyendo proposiciones fácticas según el tipo penal del delito regulado por el Código Penal” (pág. 66). Debe entenderse de ello que el carácter de imputación ha de asumir la condición de suficiencia toda vez que la se logre establecer la justificación de la potestad punitiva, además de que ello permitirá que el sujeto al que se le atribuye la responsabilidad pueda hacer ejercicio correcto de sus derechos sobre todo en lo que se refiere a la defensa en tanto que se podrá materializar bajo un carácter de idoneidad.

De lo expuesto en el anterior párrafo se entiende como parte de la actividad fiscal el hecho de que está bajo su responsabilidad generar un razonamiento crítico que conlleve a establecer las razones que justifican e impulsan la acción de imputar a un sujeto de manera concreta, ajustando dicha percepción a las condiciones del ejercicio de tipicidad que corresponde a un determinado delito, siendo para cada caso especial verificar las circunstancias fácticas que permitan identificar los requisitos que se presentan como parte elemental para la constitución de una tipología en el ámbito punitivo.

Baytelman Aronowsky (2001) en su obra titulada “*Litigación penal en juicios orales*” acerca de las objeciones, determina:

“La facultad de las partes para preguntar en un juicio oral no es absoluta, debido a los límites establecidos en nuestro sistema acusatorio, los abogados mediante el uso correcto de las objeciones evita que pretendan introducir información indeseable al juicio, mediante preguntas repetidas, impertinentes, sugestivas, capciosas o engañosas, mucho menos intimidantes, o que coaccionen al deponente u ofendan su dignidad, en perjuicio de la información de calidad que debe llegar limpia y clara al juez, gracias a correctos interrogatorios y contrainterrogatorios”. (págs. 119-134)

Ferrajoli (1995) en su libro titulado “*Derecho y Razón teoría del Garantismo Penal*”, sostiene:

“Se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público”. (pág. 564)

“En el proceso penal importa un conjunto de principios y garantías constitucionales que guían y gobiernan su desenvolvimiento, así como el rol de los sujetos procesales. En un proceso basado en el sistema acusatorio, la dignidad humana y la libertad como pilar del Estado democrático, son derechos fundamentales cuyo respeto se exige al máximo durante el desarrollo del proceso penal”. (pág. 267)

“La defensa técnica constituye un derecho fundamental para las partes en especial para el imputado. Así mismo la función de ejercicio esta atribuido a un letrado en derecho, está última, ejerce invocando todas las garantías procesales, para defensa eficaz para su defendido. El ejercicio de este derecho se extiende desde el inicio de investigación hasta la culminación del proceso”. (pág. 54)

3.2. El contenido de protección de la defensa procesal

Como bien se sabe el contenido de la defensa procesal que sirve para asumir su carácter fundamental emana de un ámbito convencional, es así que se puede reconocer su presencia en la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, puesto que en el inciso primero del artículo décimo primero, así como en el párrafo “d” inciso tercero del artículo décimo cuarto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; también en el párrafo “d” segundo inciso del artículo octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual sin duda ha permitido ser recogido en la estructura normativa constitucional peruana pues en el inciso décimo cuarto del artículo 139 de la Carga Magna del año 1993 puede ser observada.

Debe entenderse como propio y necesario el hecho de que la defensa que se verifica como parte del proceso penal, ello en tanto que se ha convertido en un elemento aportante del sentido de validez para lo que resulte del desarrollo del mismo proceso, es precisamente este tipo de indicación que hace referencia a la materialización de un mandato constitucional dentro de la estructura del proceso penal, lo que permite elevar el concepto de la constitucionalización de este ámbito del derecho.

Vale señalar también que la comprensión de la defensa como garantía dentro del proceso ha sido contemplada desde el ámbito jurisprudencial, es así que los llamados a la interpretación del derecho en función de sus atribuciones como Tribunal Constitucional ha señalado que “(...) es una de las condiciones indispensables para que un proceso judicial sea realizado con arreglo al debido proceso”. (Caso Silverio Espinoza contra la Sala Penal ESpecializada de la Corte Suprema de Justicia, 2002)

Con respecto a su contenido se puede indicar que la defensa procesal como garantía distingue dos ámbitos de protección uno que es negativo y otro de carácter positivo. Con respecto al positivo se puede señalar que la garantía surge con la opción de participar activamente en los procesos que se involucren a su persona, presentar sus alegatos y alcanzar el nivel de contradicción necesario, esto es como una posibilidad de acceder a la tutela. Entre tanto que el aspecto negativo se refiere al hecho de que se encuentra prohibida la indefensión, proscribida la violencia sobre la garantía de este derecho, vale decir que no se permite la restricción sin justificación, o sin que haya cumplido con la garantía del debido proceso. (Nakazaki, 2006, págs. 15-16)

3.3. La defensa técnica en el proceso penal

Es trascendental hablar del enfoque que se tiene respecto a la defensa técnica, ello en tanto que la visión protectora que tiene el Estado sobre todos los ciudadanos surge desde la antigüedad dada la figura de la defensa que procuraba la organización de las ciudades con el fin de protegerse entre ellos. Es así que se

traslada parte de esta defensa al sentido de protección mediante el patrocinio que ejercen los abogados sobre quienes requieren de dicho servicio a fin de hacer valer sus derechos.

La temática de la defensa se convierte en una situación de trascendencia para el propio desarrollo del derecho que esta contenido en las leyes, pues surge el procedimiento judicial del ámbito romano que traslada con el paso del tiempo hasta la estructura actual de secuencia procesal, en el cual se precisa de la intervención de los abogados con el fin de hacer prevalecer los derechos de quienes patrocina. Esta percepción que desde antiguo se percibe se advierte en función a ciertos preceptos romanos “honeste vivere, alterum non laedere y umm quique tribuere cuyos significados del latín son: vivir honestamente, no perjudicar al otro y dar a cada uno lo que le corresponde sobresaliendo en el derecho a la defensa los dos últimos preceptos”. (Piñas, Viteri, & Hernandez, 2020, pág. 1025)

- Las garantías del proceso penal ¿son límites al ejercicio de la defensa técnica?

“El Derecho Penal en cuanto fundamento político-criminal de la intervención punitiva del Estado, en cuanto prevención general de delitos, es consecuentemente al mismo tiempo un principio garantista del ciudadano, una limitación al poder del Estado”. (Bustos, 2017, pág. 111)

“Sólo la vigencia de estos principios garantistas permitirá el destierro de ese derecho penal del enemigo y la construcción de un derecho penal del ciudadano que a la vez no sea débil con las formas de criminalidad que enfrenta nuestra sociedad,

aun las más graves y violentas que demandan el efectivo despliegue preventivo del derecho penal”. (Caro, 2006, pág. 1045).

Baytelman Aronowsky (2001) en su obra titulada *“Litigación penal en juicios orales”* acerca de las objeciones, determina:

“La facultad de las partes para preguntar en un juicio oral no es absoluta, debido a los límites establecidos en nuestro sistema acusatorio, los abogados mediante el uso correcto de las objeciones evita que pretendan introducir información indeseable al juicio, mediante preguntas repetidas, impertinentes, sugestivas, capciosas o engañosas, mucho menos intimidantes, o que coaccionen al deponente u ofendan su dignidad, en perjuicio de la información de calidad que debe llegar limpia y clara al juez, gracias a correctos interrogatorios y contrainterrogatorios”. (págs. 119-134)

Como se aprecia de la descripción puntual del autor citado, establece una condición respecto al límite que se presenta frente a la posibilidad de cuestionar o hacer preguntas, lo cual verifica desde diversas perspectivas, siendo importante recalcar sobre aquella que se ocupa de incorporar datos que representan un carácter informativo trascendente; para tales efectos se debe indicar que las partes no poseen una libertad completa para que puedan establecer sus cuestionamientos puesto que tal acción se encuentra sujeta a requisitos específicos; por lo mismo que la posibilidad de establecer una objeción a pesar de formar parte de la capacidad de ejercer derecho a la defensa y materializar la defensa técnica, debe mantener un marco de control sobre ellas mismas.

En este sentido, Ferrajoli (1995) en su libro titulado *“Derecho y Razón teoría del Garantismo Penal”*, sostiene:

“Se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público”. (pág. 564)

La característica particular de los sistemas bajo la postura de tipo acusatoria como es el caso del sistema punitivo peruano, plantea una postura de comprensión del proceso bajo la temática garantista para su proceso, es así que las condiciones que se manifiestan como característica del mismo son trasladadas al esquema de control estatal para que asuma dicha potestad de regulación, sin dejar de atender el carácter garantista entre las que se puede apreciar a la defensa técnica como una parte esencial de la materialización del derecho a la defensa; esta postura sobre el particular desempeño de los abogados litigantes debe ser evaluada en tanto se condicione el control para verificar que se produzca con idoneidad, solo así en base a la protección garantista se estaría estableciendo una ruta para adecuado proceso.

Salas Beteta (2011) en su artículo titulado *“La eficacia del proceso penal acusatorio en el Perú”* para la Revista Prolegómenos Derecho y Valores, sostiene que:

En el proceso penal importa un conjunto de principios y garantías constitucionales que guían y gobiernan su desenvolvimiento, así como el rol de los sujetos procesales. En un proceso basado en el sistema acusatorio, la dignidad

humana y la libertad como pilar del Estado democrático, son derechos fundamentales cuyo respeto se exige al máximo durante el desarrollo del proceso penal. (pág. 267)

Adoptando lo expuesto por el autor, los derechos fundamentales procesales son aquellos derechos que tienen aplicación directa o indirecta en el proceso, tales como: el principio de igualdad procesal, el principio de contradicción e incluso a la defensa técnica.

Precisamente, el derecho a la defensa, de contradicción, la igualdad procesal, la tutela jurisdiccional efectiva y la cosa juzgada constituyen principios de la garantía del debido proceso, que ha sido identificada como una de las garantías de mayor trascendencia en el Derecho Procesal moderno.

Ccolque Ccahuantico (2017) en su tesis titulada *“La efectividad de la defensa técnica en el proceso inmediato en el Distrito Judicial de Madre de Dios”* manifiesta:

La defensa técnica constituye un derecho fundamental para las partes en especial para el imputado. Así mismo la función de ejercicio esta atribuido a un letrado en derecho, esta última, ejerce invocando todas las garantías procesales, para defensa eficaz para su defendido. El ejercicio de este derecho se extiende desde el inicio de investigación hasta la culminación del proceso. (pág. 54)

La defensa técnica, como institución procesal representa la actividad de carácter obligatorio de ser asistido por un operador jurídico durante el periodo de

procesamiento, desde la etapa investigatoria hasta la sentencia. Del mismo modo, puede ser tomada como una garantía del principio constitucional de derecho a la defensa, que no se activa a partir de la acusación fiscal, sino desde el mismo momento en que la persona tiene conocimiento que se ha iniciado una indagación o investigación preliminar en su contra.

Por su parte, el artículo IX del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, establece que: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad”.

Toda esta actividad judicial requiere entonces de un adecuado control en tanto que se pone en tela de juicio un derecho, en función a ello se puede señalar que “(...) la privación de la libertad como consecuencia de una decisión adoptada en el curso de un trámite judicial (procesos penales y contravencionales) se ha considerado tema propio del derecho al debido proceso”. (Cifuentes, 1999, pág. 123)

Como tal estas garantías suponen la correcta ejecución de los derechos como lo es la defensa técnica que se incorpora como tal en la Constitución, lo cual conlleva a verificar desde tal perspectiva el desarrollo de la actividad penal, ello en tanto que se requiere observar el carácter “(...) de constitucionalidad y de legalidad tanto para establecer quien puede privar de la libertad a una persona, como para determinar los motivos, razones y procedimientos legitimantes; y, en segundo lugar,

la exigencia de evitar detenciones o encarcelamientos arbitrarios”. (San Martín, 2004, pág. 617)

Siendo así, para el desarrollo de la actividad jurisdiccional se han creado etapas que permiten el control “(...) durante el procedimiento de persecución penal, la libertad es la regla y el encarcelamiento preventivo una excepción, permitida solo en caso de necesidad absoluta y para seguridad de la realización de los fines del procedimiento penal (...)”. (Maier, 2015, pág. 7)

Capítulo IV

Análisis de los resultados

4.1. Unidad de análisis

Partiendo del objeto de la investigación que se propone determinar si la ausencia de control judicial en la formalización de investigación preparatoria limita el ejercicio del derecho de defensa, luego se proyectó el cumplimiento de tal meta debido al análisis del criterio jurisdiccional que opera en el sistema de justicia respecto a la función de control para formalizar la acción penal. Esta unidad de observación permite la verificación del nivel de percepción de la defensa como derecho que asiste a las partes intervinientes en el desarrollo de la investigación sobre acciones delictivas.

Es para tal fin que se ha planteado la población representativa del marco de observación en la realidad, la misma que se concentra en el Distrito Judicial de Lima centro, específicamente en los juzgados de investigación preparatoria que resuelven la formalización de la investigación.

De acuerdo a tal determinación es posible atender un sector más específico que consolide la observación, esto es en razón de la muestra la cantidad de 10 resoluciones de formalización de la investigación preparatoria emitidas por los juzgados penales del distrito judicial de Lima centro.

4.2. Resultados del análisis de resoluciones de formalización de investigación preparatorias

Tabla 1: evaluación sobre el control del derecho a la defensa técnica en las resoluciones de formalización de investigación preparatoria

Expediente	Materia	Críterio
1. 03311- 2023-0- 1826-JR- PE-24	Agrupación Ilícita	<p>Según lo que se puede apreciar el criterio jurisdiccional adoptado no se encuentra influenciado por ningún tipo de acciones destinadas al control de la investigación en tanto a la formalidad o los fundamentos que validarían los elementos de convicción.</p> <p>En el considerando 3.2. se puede verificar la condición limitada del juzgador hacia un traslado de la información que proporciona el Fiscal, esto es sin un mayor índice de control sobre dicha actividad de investigación, validez de prueba posibilidad de acción de la defensa respecto a convenciones probatorias y otros elementos que consolidan una adecuada participación de los letrados en beneficio o salvaguarda de los intereses de la parte imputada, vale indicar de</p>

		manera puntual que se considera la acción del juez bajo un “carácter enunciativo”.
2. Expediente: N° 04224- 2022-0- 1826-JR- PE-16	Apropiación ilícita	No se precisa de manera específica si se han desarrollado actos de verificación sobre la defensa del imputado en torno a la comunicación de la formalización de la investigación propuesta por el Ministerio Público, tampoco se aprecia un sentido de justificación o motivación respecto a las facultades del Juez para asumir como correcta o apropiada la postura del Ministerio Público, únicamente incide en la necesidad de la correcta comunicación a través de los domicilios procesales y las casillas electrónicas. Planteamiento escueto para atribuir el inicio de la investigación preparatoria que se puede entender como la vulneración del derecho a la defensa del imputado en tanto no se genera el control de legalidad o validez de las bases probatorias que inspiran la imputación.
3. Expediente N° 03520- 2023-0-	Lesiones culposas	Se mantiene el criterio de mera comunicación de los elementos postulados por el Ministerio Público, lo

1826-JR- PE-14		cual convierte en mero traslado de parte del juez de investigación preparatoria para que se consolide el plazo de investigación a través de la formalización, no representa una actividad de control que se supone debería estar a cargo en todo momento de parte de la administración de justicia a fin de establecer una correcta tutela jurisdiccional efectiva, en la cual se incluye la defensa como derecho y sobre todo la verificación de una correcta defensa técnica.
4. Expediente N° 04134- 2023-0- 1826-JR- PE-21	Desobediencia o resistencia a la autoridad	Se verifica la invocación del derecho a la defensa en los considerandos de la resolución en tanto que se dirige sobre los intereses del agraviado, lo cual tendría que hacerse valer para todas las partes, lo cual si representaría un índice de control sobre la actividad jurisdiccional y de los letrados de la defensa que participan en la investigación, con lo cual si se estaría ejecutando el sentido de control que les asiste a los operadores de justicia. Pese a ello se mantiene el sentido de la siempre comunicación del Ministerio Público

		como requerimiento de imputación que es aceptada y trasladada sin ningún cuestionamiento de la judicatura o la especificación de los actos de control que sobre ello se hubiera realizado.
5. Expediente N° 03611- 2023-0- 1826-JR- PE-24	Agrupación ilícita	De acuerdo al numeral 2.1. de la resolución se indica la obligación de la judicatura respecto a la verificación de la presencia de requisitos que se han previsto en el ordenamiento jurídico penal procesal, lo cual se precisa como un fundamento legal mas no se realiza un desarrollo de la evaluación puntual que se hubiera realizado en el caso específico para motivar adecuadamente con ello la decisión de aceptar la formalización y el establecimiento de los plazos requeridos para tal fin de investigación. Además se aprecia el mismo sentido asumido sobre las labores del juez en tanto que se limita a la función o carácter enunciativo de la comunicación que ha realizado el Ministerio Público para alcanzar la formalización de la investigación.

6. Expediente N° 08083-2022-0-1826-JR-PE-17	Uso de documentos falsos.	Según lo que se puede verificar en la indicción del apartado quinto de la resolución, existe una posibilidad de control direccionada a la intervención de las partes respecto a sus pedidos de esta actividad para que el Juez pueda intervenir como tal. Esta indicación no se encuentra ajustada al supuesto de control que a su cargo tiene la judicatura, en tanto que no se presenta como una acción destinada al verdadero resguardo de las garantías sobre todo del derecho a la defensa que en especial interés debe ser salvaguardado en el proceso de investigación. Es también común el criterio al resto de las resoluciones en tanto que se presenta el mismo sentido asumido sobre las labores del juez en tanto que se limita a la función o carácter enunciativo de la comunicación que ha realizado el Ministerio Público para alcanzar la formalización de la investigación.
7. Exp. N° 237-2023-	Robo de ganado	Se aprecia el mismo criterio respecto a la participación del magistrado del poder

0-1826-JR- PE-18		judicial que en esta fase le corresponde en tanto que se limita a la función o carácter enunciativo de la comunicación que ha realizado el Ministerio Público para alcanzar la formalización de la investigación.
8. Expediente N° 03177- 2023-0- 1826-JR- PE-25	Uso de documentos falsos	No se aprecia un sentido de control de parte del criterio adoptado por el magistrado del Poder judicial dado que solamente se limita a la ejecución de las pautas procesales pero no motiva la decisión de la formalización, indicando el mismo sentido asumido sobre las labores del juez en tanto que se limita a la función o carácter enunciativo de la comunicación que ha realizado el Ministerio Público para alcanzar la formalización de la investigación.
9. Expediente 03119- 2023-0- 1826-JR- PE-24	Apropiación ilícita	Se indica como base del criterio el criterio normativo que representa la exigencia de verificación de los requisitos exigidos para asumir la postura de investigación formal , pero no se desarrolla el ejercicio de esta labor en función a lo planteado por el Fiscal, esto es se presume que toda esta

		<p>labor ha sido realizada. Lo que se puede indicar es que tal supuesto de control que a su cargo tiene la judicatura no se logra con efectividad, en tanto que no se presenta como una acción destinada al verdadero resguardo de las garantías sobre todo del derecho a la defensa que en especial interés debe ser salvaguardado en el proceso de investigación. Es también común el criterio al resto de las resoluciones en tanto que se presenta el mismo sentido asumido sobre las labores del juez en tanto que se limita a la función o carácter enunciativo de la comunicación que ha realizado el Ministerio Público para alcanzar la formalización de la investigación.</p>
<p>10. Exp. 02198- 2023-0- 1826-JR- PE-11</p>	<p>Lesiones culposas</p>	<p>Se aprecia el carácter comunicativo que respalda la decisión del la judicatura respecto a la postulación del Ministerio Público, supuesto de control que a su cargo tiene la judicatura; lo señalado se advierte en tanto que no se presenta como una acción destinada al verdadero resguardo de las garantías sobre todo del</p>

		derecho a la defensa que en especial interés debe ser salvaguardado en el proceso de investigación. Lo indicado limita a la función o carácter enunciativo de la comunicación que ha realizado el Ministerio Público para alcanzar la formalización de la investigación.
--	--	--

OBSERVACIÓN:

De acuerdo a la revisión de los expedientes plasmados en la tabla que antecede, se ha podido apreciar dos niveles de acción de los magistrados del Poder Judicial en esta fase de la apertura formal de la investigación preparatoria, el primero que muestra un criterio adoptado desde el punto de vista meramente procesal indicando que se tienen por comunicada la decisión de formalizar la investigación, mas no se presenta ninguna motivación de análisis en razón de los fundamentos que plantea el Ministerio Público.

El otro nivel de criterio que se puede percibir es aquel que también se basa en un aspecto normativo procesal describiendo la pauta que exige el control sobre los derechos del imputado y de las partes en general, pero no precisan el desarrollo de dicho control respecto a la garantía de la defensa en especial, aspecto que interesa a esta evaluación. Es decir no se muestra el desarrollo de la evaluación de exigencias procesales destinadas al resguardo de las garantías que le asisten al imputado, menos de la condición de ejercicio sobre su derecho a la defensa, tanto

por la propia intervención del Juez que no precisa el control antes indicado y tampoco verifica la presencia de una correcta defensa técnica a este nivel.

Es importante señalar que las indicaciones procesales que se alcanzan como un elemento casi constante en las decisiones jurisdiccionales se indican como ceñidas a “la evaluación o control en base a la normativa 4° del artículo 65° del CPP, concordante con lo establecido en el párrafo c) del apartado 2° del artículo 71° y los apartados 3° y 4° del artículo 127° del Código acotado que establecen el derecho de los investigados de tener asistencia letrada y la fijación de domicilio procesal para el cumplimiento cabal de dicho derecho durante la investigación preparatoria”. Así mismo se puede apreciar la participación de un criterio normativo centrado en aspectos procesales sobre todo en lo establecido como parte de los requisitos mínimos exigidos por el artículo 336° apartado 2°.

Capítulo V

Contrastación de la hipótesis

Vinculado con el diseño de la contrastación, se encuentran fases de evaluación sobre todo a nivel crítico, como es el caso de la discusión de los resultados que se han obtenido tanto a nivel teórico así como también en función a lo que se ha observado de la realidad jurisdiccional, esto es en los casos de formalización de investigación preparatoria en que no se aprecia presencia de control judicial efectivo. Sobre ello versa la discusión de los resultados que permiten que la investigadora asuma una postura específica por cada objetivo de la tesis, para luego con dichos resultados se pueda establecer un marco de validación sobre las variables que finalmente dieron como resultado la determinación final de la investigación, a través de la cual se ha podido corroborar la hipótesis inicial.

5.1. La discusión de los resultados

Esa fase del trabajo académico se desarrolla con la intención de establecer un sentido crítico sobre los contenidos que se han vertido en la investigación, ello en función a la postura de cada una de las fuentes para así establecer una propia postura de parte de la investigadora, sobre todo en función separada correspondiente a cada uno de los objetivos específicos, así dichos resultados se han de sintetizar en una siguiente fase para crear la determinación final de la investigación.

5.1.1. Sobre la discusión del objetivo específico: “Estudiar los fundamentos de la formalización de investigación preparatoria que justifiquen el control judicial”

Teniendo en cuenta el sentido de este objetivo específico, la búsqueda de información se ha basado en la formalización de la investigación preparatoria teniendo en consideración los efectos de la intervención estatal que se produce mediante el control de la propia acción punitiva, el tener que iniciar la investigación en el ámbito penal requerirá de un nivel de certeza idóneo que permita luego alcanzar la verdad de los hechos.

En virtud de lo señalado anteriormente es que se ha de construir la discusión de esta meta, partiendo de la evaluación que corresponde a los antecedentes o trabajos previos a la investigación, esto es las posturas o determinaciones que se han alcanzado en otras tesis vinculadas con el tema propuesto o con alguna de las variables, es así que se tiene la tesis de Ocas (2017) en la que se indica la importancia de la imputación necesaria la misma que debe tener características esenciales como son la presencia de hechos concretos, además de que la evaluación que califica jurídicamente tal acción sea adecuada y finalmente deben estar presentes circunstancias que formen la convicción del magistrado.

Indica además que esta percepción de la imputación debe estar orientada hacia un aspecto de comunicación, puesto que se precisa que el afectado por la imputación deba estar enterado de lo que contiene tal acusación, ello en atención de las garantías procesales que le asisten, sobre todo en el ámbito de la configuración de la defensa como derecho, garantía que le debe asistir en todo momento tanto en

el ámbito formal así como en el sentido material de tal derecho, con lo que se consolida un adecuado desarrollo de la investigación penal.

Sobre este aspecto desarrollado por la investigadora in comento, es prudente hacer el siguiente cuestionamiento ¿Qué tipo de límites normativos o de criterio jurídico, se evidencia en el desarrollo del proceso penal sobre la imputación necesaria?

De acuerdo al condicionamiento de la imputación se debe reconocer que esta ha de basarse en un elemento esencial que es el aspecto fáctico o lo que representa la circunstancia que se da en la realidad, este elemento de hecho es lo que ha de impulsar la acción del sistema de justicia para establecer un marco de acciones con el fin de reconocer si en primer lugar se consolida como una acción delictiva y luego a quien corresponde la responsabilidad de tal acto. El hecho que se conoce como noticia criminal será aquello que vincule al sujeto que lo ha realizado, esto lo convierte en investigado en mérito a tal relación, luego este conocimiento que se verá reforzado con otros elementos de convicción permitirá que su situación pase a ser la de un imputado en la investigación penal.

Como se puede apreciar en primer término existen límites de carácter normativo, puesto que se presentan en la realidad en virtud de las propias reglas que construyen el ordenamiento jurídico, tal es el caso de los tipos penales, que serán aquellos que las recojan para establecer un límite a la acción interventora del Estado para aplicar su potestad punitiva. Vale decir que la imputación solamente alcanzará el nivel de necesaria en tanto se enmarque en el límite normativo de la descripción que realiza el tipo penal al que se pretende subsumir el hecho presuntamente

delictivo, luego de pasar tal límite recién se podrá establecer la vinculación con el sujeto activo de tal acción.

Como se puede apreciar existen lineamientos de acción que marcan la actividad funcional de la intervención del ius puniendi sobre la actividad delictiva, lo cual invita a cuestionar ¿Cuáles serán las condiciones procesales que se precisan para reconocer el vínculo entre la acción delictiva y la conducta tipificada que se incorpora en la teoría el caso?

Además de los límites ya señalados, se requiere del cumplimiento de ciertas pautas procesales y sobre todo el respeto de las fases que estructuran la investigación penal como proceso consolidado, esto significa que la intervención punitiva surge con la noticia criminal o la denuncia de parte, ante lo cual se verifica la existencia de un vínculo que une la acción que se presume delictiva en un inicio con respecto a la descripción de la conducta en el tipo penal, esta acción es indispensable para poder construir la teoría del caso que se postula ante el sistema de justicia a fin de iniciar la investigación.

Esto conlleva al razonamiento de que la imputación solamente puede asumirse en función a la existencia de un elemento distorsionador del orden que establece el esquema jurídico como tal, solamente ante dicha alteración se podrá reconocer la acción delictiva y luego establecer o dar inicio a la observación del hecho como parte de una investigación penal, se entiende que cumpliendo con estas condiciones previas, el razonamiento fiscal se orienta hacia el parámetro de imputación necesaria.

Del mismo modo se ubica otro antecedente académico sobre el tema, así Ramírez (2018) sobre cuyo postulado se puede cuestionar ¿Qué aspectos deben ser considerados como necesarios para el desarrollo de una imputación adecuada por parte del titular de la acción penal?

Lo planteado por la investigación citada es que la condición de necesidad planteada sobre la acción interventora del representante del Estado, esta en función al cumplimiento de exigencias previas a la formulación de la acusación, esto es que se construya una teoría del caso en base a la recopilación de datos que describen la acción delictiva, obviamente en base a la pauta normativa que establece la dirección del tipo penal. Tal descripción deberá ser atendida en razón de la realidad y tendrá que ser construida con la mayor claridad posible con la suficiente precisión de los hechos, sobre todo en aspectos de cronología de los acontecimientos, lo cual permita una adecuada calificación del hecho delictivo a fin de no dejar pasar elementos que puedan servir de convicción al argumento punitivo.

Además de ello se tiene la investigación de Choque (2018) la cual mantiene el enfoque de las anteriores respecto a la construcción adecuada de la imputación como un deber del Fiscal como representante del Estado y que debe basarse en pautas de rigor específico orientado a la construcción de los tipos penales como directrices del ordenamiento jurídico. Sobre ello deja en claro la necesidad de que se ejecute de manera correcta la construcción de su teoría del caso con el fin de abrir la posibilidad de que se consolide el derecho a la defensa de quienes resulten imputados, ello en tanto que la claridad de la imputación permitirá construir una

estrategia de defensa adecuada, sin lo cual no se podría establecer una condición optima de la defensa técnica y altera el derecho fundamental reconocido para el imputado.

Otro aspecto relacionado con el tema es la defensa como derecho y que se encuentra reconocida para las partes que intervienen en el proceso penal en el que resultaren imputados, por lo mismo que se tiene en cuenta la tesis de Gómez (2015), la cual se orienta hacia un criterio de atribución ciudadana que se traslada al proceso penal, pero deja en claro que existe una fase previa para establecer los elementos de convicción sobre los que se ha de formular la imputación delictiva, cabe indicar que debe ser bajo el parámetro punitivo de un tipo penal, toda esta acción debe ser clara para permitir el acceso al derecho de la defensa del imputado.

Atendiendo al sentido de la investigación conviene cuestionar ¿qué fundamentos consolidan la formalización de la investigación preparatoria? Según los planteamientos jurisdiccionales el control de este tipo de indicio debe ser muy exhaustivo, sobre todo según Panta (2017) para verificar el nivel convincente del indicio que exista para que el Estado aplique el ius puniendi sobre el sujeto imputado. Se trata pues de un deber que ha de cumplir el titular de la acción penal en tanto representante del Estado, lo cual consolida un proceso abierto que describe las acciones como tal se le imputan al sujeto así se le podrán requerir pronunciamiento sobre estos detalles lo cual podrá atender dicho sujeto como parte del ejercicio de su defensa.

TOMA DE POSTURA

De acuerdo al resultado que se ha obtenido de la revisión teórica sobre aquellos fundamentos que inspiran la formalización de la investigación preparatoria para entenderse como base jurídica que justifique la existencia o exigencia del control jurídico, es posible sobre ello señalar que, lo que se entiende por control judicial esta centrado en la potestad estatal para distribuir y controlar el poder, en su dimensión horizontal, que como tal le corresponde al Poder Judicial dirigir dicha potestad. En tal sentido la acción que conlleva a establecer pautas de rigor jurídico sobre la actividad desarrollada por los representantes del sistema de justicia, se justifica en tanto existan elementos que funden dicho control.

Esta intervención estatal diferida a través de los operadores del Poder Judicial cae en la figura del Juez de Garantías, que tendrá la función de establecer el control sobre aquellos fundamentos que inspiran la formalización de la investigación preparatoria que como bien se conoce estarán comprendidos por la certeza que otorguen los elementos de convicción respecto al ilícito cometido, así como respecto a la individualización del sujeto presuntamente responsable para agregar finalmente el fundamento de la vigencia del delito a imputar, siendo así, todos estos elementos deben ser filtrados por el control de garantías que incorpora a la defensa como derecho en su fase de ejecución que será la defensa técnica que se supone debe tener una condición idónea.

5.1.2. Sobre la discusión del objetivo específico: “Describir doctrinariamente el contenido esencial del derecho de defensa para asegurar su ejercicio en el proceso penal”

Teniendo en cuenta la ruta que ha tomado esta segunda meta de la investigación que busca describir desde la perspectiva doctrinaria lo referente al contenido esencial del derecho de defensa, esto es sus ámbitos de protección con el fin de preservar la acción que se promueve a través del proceso penal; para tal fin se ha tenido en cuenta la siguiente interrogante: ¿cuál es el ámbito de protección del derecho a la defensa?

En función a la defensa como una garantía constitucional expresada de forma directa a través del derecho a la defensa, se debe entender como aquella potestad que le corresponde a todo ciudadano que atraviesa por un sendero de observación judicial respecto a su conducta o supuesto de acción. Ante ello es importante tener en claro si es que existen mecanismos que propician tal finalidad, se entiende desde luego que el sistema de justicia habrá de estar dotado de ello con el fin de salvaguardar la igualdad que a todos los que participan en un proceso penal le corresponde.

Teniendo en cuenta el ámbito de protección de la defensa como derecho, es prudente señalar que en el proceso penal se connotan figuras procesales cuya intervención pueden observarse como una vulneración de este derecho, pues para el caso de la imputación concreta, es posible que se establezca una vulneración directa sobre los derechos del investigado, pero ha de comprenderse que estas restricciones para alcanzar legitimidad deben estar debidamente justificadas, es precisamente donde participa el control del propio sistema.

Para tal fin, como ya se ha indicado, deben existir lineamientos jurídicos que permitan alcanzar un óptimo nivel de efectividad, para tales efectos se ha de verificar primero la pertinencia de las medidas, tal es el caso del secreto o la reserva de la investigación, que opera en tanto exista una justificación por necesidad de la investigación propiamente dicha, pero cabe indicar que existen para ello reglas específicas que controlan su ejecución, o cuando menos debieran hacerlo.

Es importante cuestionar sobre estas justificaciones ¿Qué límites tiene el proceso penal para garantizar el derecho a la defensa? Sobre ello es prudente señalar que este derecho contempla tanto un ámbito de protección constitucional así como otro de tipo procesal directamente, el primero que se refiere a la garantía de poder acceder al sistema de una forma igualitaria para decir sus derechos de manera directa y que estos sean atendidos, de otro lado existe el ámbito procesal cuya protección respecto al derecho a la defensa se materializa en función a las justificaciones que se plantean para la restricción de los derechos del investigado, es por ello que se debe precisar en cada decisión una correcta motivación para alcanzar un adecuado nivel de legalidad que como principio se controla. En concreto la imputación debe darse de manera suficiente en sus motivaciones con el fin de que el imputado tenga como acceso a la materialización de la defensa poniendo a conocimiento su perspectiva de oposición en pos de sus derechos.

Lo indicado permite establecer el espacio de control que ejerce el derecho de defensa, pero además cabe preguntar ¿Qué efectos procesales surte el control del derecho a la defensa sobre la imputación objetiva en el proceso penal? Sin duda

alguna existe un proceso cuyas características acusatorias no desvirtúan la condición de dignidad que le es atribuida a cada ciudadano, así como el carácter de libertad que le pertenece en tanto miembro de un sistema democrático, lo cual ha de estar asegurado con la participación de especialistas conocedores del proceso a fin de que mediante el uso de las técnicas se pueda establecer un correcto ejercicio de la defensa técnica, solo así se podrán establecer resultados efectivos.

TOMA DE POSTURA:

La verificación de la meta destinada a describir doctrinariamente el contenido esencial del derecho de defensa para asegurar su ejercicio en el proceso penal, ha permitido reconocer que la manifestación de este derecho se consolida en base a dos ámbitos de protección, el primero es el ámbito de protección normativa, esto es que la defensa como derecho se plasma de manera abstracta como garantía en la Constitución, lo cual sin duda requiere un desarrollo legislativo que conlleve a su ejecución correcta. Es precisamente sobre este aspecto regulador que se percibe el otro ámbito de protección que constituye la defensa procesal, que se logra ejecutar además de las pautas existentes en el campo del proceso penal con la correcta orientación legal por parte de un letrado que de manera idónea consolide el derecho a la defensa técnica.

5.1.3. Sobre la discusión del objetivo específico: “Analizar la realidad procesal respecto a la limitación del derecho de defensa por la ausencia de control judicial en la formalización de investigación preparatoria”

De conformidad con lo indicado en la sección de análisis y resultados se ha convenido en la observación de la realidad jurisdiccional con el fin de reconocer si existe en el criterio jurisdiccional algún indicio de control efectivo sobre el derecho

de defensa que les corresponde a los imputados, lo cual se presenta diseminado sobre el concepto procesal de verificación de la viabilidad jurídica de los elementos que se presentan como sustento por parte del Fiscal.

Esta condición de control se muestra en dos niveles de acción de los magistrados del Poder Judicial en esta fase de la apertura formal de la investigación preparatoria, el primero que muestra un criterio adoptado desde el punto de vista meramente procesal indicando que se tienen por comunicada la decisión de formalizar la investigación, mas no se presenta ninguna motivación de análisis en razón de los fundamentos que plantea el Ministerio Público.

Resulta adecuado también señalar la presencia de otro criterio que se puede percibir es aquel que también se basa en un aspecto normativo procesal describiendo la pauta que exige el control sobre los derechos del imputado y de las partes en general, pero no precisan el desarrollo de dicho control respecto a la garantía de la defensa en especial, aspecto que interesa a esta evaluación. Es decir no se muestra el desarrollo de la evaluación de exigencias procesales destinadas al resguardo de las garantías que le asisten al imputado, menos de la condición de ejercicio sobre su derecho a la defensa, tanto por la propia intervención del Juez que no precisa el control antes indicado y tampoco verifica la presencia de una correcta defensa técnica a este nivel.

Según lo indicado, lo que se aprecia en el desarrollo jurisdiccional es un sentido de control sobre condiciones procesales que advierten como elemento de verificación de la regla, esto es la participación de un criterio normativo centrado

en aspectos procesales sobre todo en lo establecido como parte de los requisitos mínimos exigidos por el artículo 336° apartado 2°.

Cabe hacer la precisión que los elementos procesales que se advierten en esta labor jurisdiccional resulta constante en las decisiones, puesto que se indican como ceñidas a “la evaluación o control en base a la normativa 4° del artículo 65° del CPP, concordante con lo establecido en el párrafo c) del apartado 2° del artículo 71° y los apartados 3° y 4° del artículo 127° del Código acotado que establecen el derecho de los investigados de tener asistencia letrada y la fijación de domicilio procesal para el cumplimiento cabal de dicho derecho durante la investigación preparatoria”.

Pese a todo lo señalado existe una carencia de motivación, condición que se presume como característica infaltable en la construcción de este tipo de resoluciones, situación que pone en un marco de indefensión a las partes involucradas sobre todo en el ámbito de la defensa que le corresponde al imputado, vale decir que la función jurisdiccional es incompleta en tanto no se justifica con la motivación pertinente, las razones por las que debieran darse por iniciada formalmente la investigación.

Esta situación puede ser comprendida como un elemento que estaría proyectando la tan dura crítica al proceso de investigación cuya tendencia se ha tornado hacia la característica casi de exigencia para aplicar prisión preventiva, lo que no representa una adhesión al carácter excepcional de dicha medida especial; precisamente porque no se realiza un control efectivo en esta fase, siendo

importante la evaluación exhaustiva de los medios que sirven para solicitar la formalización, asegurando así un verdadero carácter garantista sobre la defensa como derecho y desde luego el control adecuado de la imputación que pone en tela de juicio la inocencia del imputado.

TOMA DE POSTURA:

Como resultado de la discusión sobre la realidad procesal respecto a la limitación del derecho de defensa por la ausencia de control judicial en la formalización de investigación preparatoria, se puede indicar que no existe un criterio debidamente adoptado en razón de la necesidad de control respecto al derecho a la defensa en esta fase; lo cual se aprecia además como una carencia en el aspecto de control general que debería presentarse en el marco de la formalización de la investigación preparatoria, dando cabida a la posibilidad de injustos jurídicos o la presencia de elementos desvinculados de la verdadera intención del proceso de investigación, ello en tanto que podría haberse incorporado factores probatorios que no se ajusten a la exigencia del proceso, lo cual dejaría camino libre para las posteriores nulidades.

5.1.4. Sobre la discusión del objetivo específico: “Proponer la creación de un mecanismo procesal para el control judicial de la defensa técnica en la formalización de la investigación preparatoria”

Con base en las determinaciones hasta ahora alcanzadas mediante el desarrollo de la investigación, se procura un mayor control en relación a la fase que comprende la formalización de la investigación preparatoria, vale decir que las condiciones en las que se produce esta apertura de la acción del ius puniendi del

Estado, en tanto que comporta una acción de poder, debe ser controlada adecuadamente. Sin duda alguna que las pautas de control se derivan en diversas modalidades, puesto que si se trata de control constitucional bien puede señalarse como una alternativa de criterio otorgada a los magistrados.

Además de esta posibilidad de accionar con el control constitucional mediante el control difuso, se precisa de un esquema regido por la pauta de garantías que supone el desarrollo del proceso penal; es así que las acciones que se desarrollen dentro de la investigación tendrán la característica de seguridad jurídica. Precisamente este último aspecto será el que fundamente la incorporación de pautas jurídicas que procuren un adecuado control sobre todo dirigido a la defensa técnica como parte del ejercicio del derecho constitucional a la defensa.

Luego de ello y en base a la realidad observada se presenta una situación de ausencia respecto a lo que debería ser el control sobre el ejercicio del derecho a la defensa, esto que no solo debería depender del propio imputado sino que debiera ser una labor exigida para los propios magistrados, que en aras de controlar el normal desarrollo de la investigación bajo la pauta garantista, justificaría su intervención de oficio ante la observación de carencias en la defensa técnica. Esta actividad de control debería concretarse también sobre la actividad del Fiscal, en tanto que debe eliminarse el paradigma de un Ministerio Público persecutor de la acción ilícita pretendiendo sancionar a toda costa.

Lo último señalado tendría que dejarse de lado como percepción de la actividad fiscal, puesto que sale del marco de la finalidad del derecho penal y su

proceso que es únicamente alcanzar el esclarecimiento de la verdad, por lo mismo que la correcta atribución del Fiscal debe asumirse como el controlador de la legalidad. Esta acción atañe al debido proceso como principio continente de otros principios y derechos, entre los que se encuentra a la defensa como derecho y su fase de ejecución que corresponde al control de la defensa técnica.

Todo lo señalado se justifica en tanto que si bien es cierto que la actividad de control debe partir del propio Fiscal, las condiciones externas o propias de la recopilación de medios que atribuyan certeza para impulsar la investigación bien podrían contaminar esta función, por lo mismo que se justifica la participación de un control superior que solamente puede ser generado por un juez de garantías. En tal sentido la propuesta de incorporar mecanismos que permitan eficiencia en el control ya señalado se inclina más sobre la alternativa de ampliar el ámbito de acción del juez de garantías que participa en la fase intermedia al verificar el requerimiento de acusación.

Si bien, esta sugerencia puede parecer demasiado ostentosa, se justifica además de las razones antes expuestas en la necesidad de establecer el adecuado control del ius puniendi en esta como en todas las fases de la investigación penal, esto en tanto que se debe distinguir la independencia posee el proceso penal en general y la autonomía que caracteriza a cada una de sus etapas. Tal cual, la etapa de investigación preparatoria tiene esta condición, lo que implica que las determinaciones que surjan como resultado de su ejecución son pasibles de control respecto al poder que se maneja tanto por parte de los funcionarios, así como de las propias partes.

En tal sentido la aplicación de las funciones que corresponden a juez de garantías, debería convertirse en una propuesta ampliatoria para que la realice el juez de investigación preparatoria, con lo cual se evitaría la característica que se ha identificado en la revisión de los casos en los que se ha producido la formalización de investigación preparatoria, de los cuales se advierte la ausencia de motivación respecto al supuesto control establecido tanto para la certeza, individualización y vigencia del ilícito, lo cual no solo debe reforzarse como exigencia, sino que debe ampliarse al control de la defensa técnica desarrollada por los letrados.

La garantía que se pretende controlar respecto a la defensa técnica adquiere importancia en tanto que las acciones de defensa desarrolladas de manera inidónea traen como consecuencia no solo la alteración del derecho a la defensa sino factores vinculados con la garantía de otros derechos lo cual desvirtúa el debido proceso. Para tal fin la potestad otorgada a los magistrados se basará en la que corresponde a un juez de garantías en la siguiente fase.

TOMA DE POSTURA

Lo desarrollado respecto a la meta Proponer la creación de un mecanismo procesal para el control judicial de la defensa técnica en la formalización de la investigación preparatoria, ha permitido reconocer la viabilidad jurídica que pasa de una creación de mecanismos nuevos hacia la necesidad de ampliar el concepto de control garantista de la fase intermedia para que sea contemplada a nivel de la investigación preparatoria. Esta indicación se denota con la verificación de los casos de esta fase de investigación, donde está ausente la correcta motivación del

control ejercido por el Poder Judicial, lo cual hace presumir que dicha acción no se ha desarrollado de manera adecuada.

Por tal razón es que se pretende trasladar el campo de control no solo sobre la motivación del resultado que orienta a las determinaciones judiciales en esta fase sino también para que se amplíe el ámbito de control que corresponde al Juez de Garantías, para que sea asumida en esta fase con especial atención de la participación idónea de los letrados en ejercicio de la defensa técnica. Esto último a fin de salvaguardar los derechos del imputado y hacer que prevalezca el debido proceso dotando así a la investigación del carácter garantista que debe poseer.

5.2. Validación de las variables

La comprensión de problema de investigación se ha basado en los conceptos estáticos que plantearon las variables bajo una relación causal, es en razón de ello que la ruta de contrastación incorpora la necesidad de establecer un marco de evaluación de la validez de cada una de las variables, con dicho resultado se ha podido establecer razonamientos específicos sobre cada una de ellas y que con su unión podrá luego establecerse el sentido de la determinación final de la investigación.

5.2.1. Validación de la variable independiente: “El control judicial en la formalización de investigación preparatoria”

Ha de considerarse de manera inicial que esta variable bajo su apreciación conceptual sobre el origen del problema debe ser validada en función a las posturas que se adoptan como resultado de la discusión de cada uno de los objetivos específicos seleccionados bajo un vínculo de pertenencia, por lo mismo que se indica que debe asumirse por control judicial el que está centrado en la potestad estatal para distribuir y controlar el poder, en su dimensión horizontal, que como tal le corresponde al Poder Judicial dirigir dicha potestad. En tal sentido la acción que conlleva a establecer pautas de rigor jurídico sobre la actividad desarrollada por los representantes del sistema de justicia se justifica en tanto existan elementos que funden dicho control.

Esta intervención estatal diferida a través de los operadores del Poder Judicial cae en la figura del Juez de Garantías, que tendrá la función de establecer el control sobre aquellos fundamentos que inspiran la formalización de la investigación preparatoria que como bien se conoce estarán comprendidos por la

certeza que otorguen los elementos de convicción respecto al ilícito cometido, así como respecto a la individualización del sujeto presuntamente responsable para agregar finalmente el fundamento de la vigencia del delito a imputar, siendo así, todos estos elementos deben ser filtrados por el control de garantías que incorpora a la defensa como derecho en su fase de ejecución que será la defensa técnica que se supone debe tener una condición idónea.

De acuerdo a las posturas adoptadas por la investigadora se llega a validar la variable independiente con la siguiente afirmación:

Es necesario el control judicial en la formalización de investigación preparatoria en virtud del debido proceso

5.2.2. Validación de la variable dependiente: “El ejercicio del derecho de defensa”

Concordando la función de la variable anterior que era la causa del problema con esta variable, resulta que se trata del concepto de la consecuencia del problema, por lo cual se demuestra su validez indicando que la manifestación de este derecho a la defensa se consolida en base a dos ámbitos de protección, el primero es el ámbito de protección normativa, esto es que la defensa como derecho se plasma de manera abstracta como garantía en la Constitución, lo cual sin duda requiere un desarrollo legislativo que conlleve a su ejecución correcta. Es precisamente sobre este aspecto regulador que se percibe el otro ámbito de protección que constituye la defensa procesal, que se logra ejecutar además de las pautas existentes en el campo del proceso penal con la correcta orientación legal por parte de un letrado que de manera idónea consolide el derecho a la defensa técnica.

Es necesario indicar que no existe un criterio debidamente adoptado en razón de la necesidad de control respecto al derecho a la defensa en esta fase; lo cual se aprecia además como una carencia en el aspecto de control general que debería presentarse en el marco de la formalización de la investigación preparatoria, dando cabida a la posibilidad de injustos jurídicos o la presencia de elementos desvinculados de la verdadera intención del proceso de investigación, ello en tanto que podría haberse incorporado factores probatorios que no se ajusten a la exigencia del proceso, lo cual dejaría camino libre para las posteriores nulidades.

Para garantizar la protección de la defensa técnica es necesario reconocer la viabilidad jurídica que pasa de una creación de mecanismos nuevos hacia la necesidad de ampliar el concepto de control garantista de la fase intermedia para que sea contemplada a nivel de la investigación preparatoria. Esta indicación se denota con la verificación de los casos de esta fase de investigación, donde está ausente la correcta motivación del control ejercido por el Poder Judicial, lo cual hace presumir que dicha acción no se ha desarrollado de manera adecuada.

Resulta necesario que se amplíe el ámbito de control que corresponde al Juez de Garantías, para que sea asumida en esta fase con especial atención de la participación idónea de los letrados en ejercicio de la defensa técnica. Esto último a fin de salvaguardar los derechos del imputado y hacer que prevalezca el debido proceso dotando así a la investigación del carácter garantista que debe poseer.

Según lo que se ha planteado en las posturas adoptadas después de la discusión se entiende como validación de la variable la indicación siguiente:

El ejercicio del derecho de defensa debe ser adecuadamente controlado para garantizar los derechos del imputado

5.3. Contrastación de la hipótesis

Siendo esta la última fase de la secuencia de contrastación se ha podido crear como resultado de la unión de las dos afirmaciones que validan las variables de estudio, esto ha generado la determinación final de la investigación lo cual representa el concepto que adopta la investigadora frente a la problemática mostrada.

5.3.1. Determinación final

Es necesario el control judicial en la formalización de investigación preparatoria en virtud del debido proceso para lograr que El ejercicio del derecho de defensa sea adecuadamente controlado para garantizar los derechos del imputado.

5.3.2. Contrastación de la hipótesis

Tabla 2: cuadro de la contrastación de la hipótesis con la determinación final de la investigación.

Hipótesis inicial	Determinación final
La ausencia del control judicial en la formalización de investigación preparatoria limita el ejercicio del derecho de defensa.	Es necesario el control judicial en la formalización de investigación preparatoria en virtud del debido proceso para lograr que El ejercicio del derecho de defensa sea adecuadamente controlado para garantizar los derechos del imputado

Conclusiones

Conclusión general

Se ha logrado determinar que es necesario el control judicial en la formalización de investigación preparatoria en virtud del debido proceso para lograr que el ejercicio del derecho de defensa sea adecuadamente controlado a fin de garantizar los derechos del imputado.

Conclusiones específicas

Primera:

Se concluye de acuerdo con los fundamentos que inspiran la formalización de la investigación preparatoria que justifican el control jurídico, este último está centrado en la potestad estatal para distribuir y controlar el poder, en tal sentido la actividad desarrollada por los representantes del sistema de justicia debe controlarse. Para tal fin el Juez de Garantías, controla los fundamentos que inspiran la formalización de la investigación preparatoria como certeza, individualización y vigencia del delito a imputar, control que debe incorporar a la defensa como derecho en su fase de ejecución que será la defensa técnica que se supone debe tener una condición idónea.

Segunda:

Se logró concluir en base a la doctrina sobre el contenido esencial del derecho de defensa para asegurar su ejercicio en el proceso penal, que la manifestación de este derecho se consolida en base a dos ámbitos de protección, el

primero es el ámbito de protección normativa como garantía constitucional, y su desarrollo legislativo que constituye la defensa procesal, que se logra ejecutar además de las pautas existentes en el campo del proceso con la correcta orientación legal por parte de un letrado que de manera idónea consolide el derecho a la defensa técnica.

Tercera:

Se concluye en base a la realidad procesal respecto a la limitación del derecho de defensa por la ausencia de control judicial en la formalización de investigación preparatoria, que no existe un criterio debidamente adoptado en razón de la necesidad de control respecto al derecho a la defensa en esta fase; dando cabida a la posibilidad de injustos jurídicos, ello en tanto que podría haberse incorporado factores probatorios que no se ajusten a la exigencia del proceso, lo cual dejaría camino libre para las posteriores nulidades.

Cuarta:

Se determina respecto a la posibilidad de crear un mecanismo procesal para el control judicial de la defensa técnica en la formalización de la investigación preparatoria, que, más bien resulta necesario ampliar el concepto de control garantista de la fase intermedia para que sea contemplada a nivel de la investigación preparatoria, para exigir motivación del control ejercido por el Poder Judicial, ampliando además el control que corresponde al Juez de Garantías sobre la participación idónea de los letrados en ejercicio de la defensa técnica, en pos del debido proceso y el garantismo procesal.

Recomendaciones

Primera:

Se sugiere que la estrategia diseñada como política pública que se ocupa de la administración de justicia deba enfocarse en la protección amplia del derecho a la defensa, en tal sentido el Ministerio de Justicia y Derechos humanos será el llamado para crear una ruta de trabajo adecuado para diseñar un esquema de control jurídico respecto a instituciones tan importantes como el Poder Judicial y Ministerio Público, con la intención de alcanzar mejora en la protección de los derechos del imputado.

Segunda:

Se recomienda que la ampliación de control anteriormente sugerida se enfoque en la exigencia de motivación de las decisiones del poder judicial sobre la verificación de los aspectos establecidos en el artículo 336 del ordenamiento penal adjetivo, ampliándose tal control hacia la observación de la idoneidad de la defensa técnica entendida como el ejercicio del derecho de defensa, lo cual puede construirse de la siguiente manera:

Cuerpo normativo: Código Procesal Penal

Artículo 336.- (...)

1. Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad **y controlado la idoneidad**

de la defensa técnica, bajo la motivación correspondiente dispondrá la formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria.

Bibliografía

- Arela, G., & Choque, R. (2018). *Necesidad de una Imputación Concreta como Garantía del ejercicio de Derecho de Defensa en el Distrito Judicial de Arequipa, Año 2018*. Arequipa: Universidad Tecnológica del Perú.
Obtenido de <https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/1918>
- Baytelman Aronowsky, A. (2001). *Litigación penal en juicios orales*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Bustos, J. (2017). *Principio garantista del derecho penal y proceso penal*. Lima: DIALNET. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7792301.pdf>
- Caro, D. (2006). *Las garantías constitucionales del proceso penal* (Corte Interamericana de Derechos Humanos ed.). Lima: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Obtenido de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r08047-30.pdf>
- Caso Silverio Espinoza contra la Sala Penal ESpecializada de la Corte Suprema de Justicia, 1323-2002-HC/TC (Tribunal Constitucional 9 de Julio de 2002).
- Castillo, J. (2007). El Principio de Imputación Necesaria. *Actualidad Jurídica*(N° 10).
- Ccolque Ccahuantico, S. (2017). *La efectividad de la defensa técnica en el proceso inmediato en el distrito judicial Madre de Dios*. Madre de Dios: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.
- Chincoya, H. (2011). De la premodernidad a la posmodernidad en la justificación del ius puniendi. *Entre libertad y castigo: dilemas del Estado*

contemporáneo, 247-263. Obtenido de
<http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/12010>

Choquecahua, A. (2014). El Principio de Imputación Necesaria: Una aproximación conceptual, analítica, jurisprudencial y crítica en el Nuevo Modelo Procesal Penal Peruano. *Derecho y Cambio Social*, 1-32. Obtenido de https://www.derechoycambiosocial.com/revista035/EL_PRINCIPIO_DE_IMPUTACION_NECESARIA.pdf

Cifuentes, E. (1999). Libertad personal. *Ius et Praxis*, V(1), 121-163. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/197/19750105.pdf>

Ferrajoli, L. (1995). *Derecho y Razón teoría del Garantismo Penal*. Madrid: Trotta.

García, M., & Zambrano, A. (2005). Seguridad ciudadana: El aporte de las metodologías implicativas. *Revista de Psicología de la Universidad de Chile*, XIV(2), 63-79. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/273028391_Seguridad_Ciudadana_El_Aporte_de_las_Metodologias_Implicativas

Gómez, J. (2015). *Derecho a la Defensa Antes y Durante la Audiencia de Formulación de Imputación en el Proceso Penal en Colombia*. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Obtenido de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7085/Articulo%20ALEJANDRA%20GOMEZ%20APROBADO%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Maier, J. B. (2015). La privación de la libertad durante el procedimiento penal. El encarcelamiento preventivo hoy. *Instituto de Investigaciones Jurídicas*, 6-19.

- Medina, A. (2007). Los principios limitativos del ius puniendi y las alternativas a las penas privativas de libertad. *IUS Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas*(19), 87-116. Obtenido de <https://www.revistaius.com/index.php/ius/article/view/180/175>
- Mendoza, F. (2015). *La necesidad de una Imputación Concreta en la Construcción de un Proceso Penal Cognitivo. 2da. ED.* Lima: IDEMSA.
- Nakazaki, C. (2006). La garantía de la defensa procesal: Defensa eficaz y nulidad del proceso penal por indefensión. *Revista Universidad de Lima*, 13- 43. Obtenido de https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/5480/Nakazaki_Cesar.pdf
- Novoa, E. (2007). Algunas consideraciones acerca de los principios limitadores del ius puniendi estatal y la expansión del derecho penal. *Actualidad jurídica*(15), 191-202. Obtenido de <https://derecho.udd.cl/actualidad-juridica/files/2021/01/AJ-Num-15-P191.pdf>
- Ocas, M. (2017). *El Derecho a la Imputación Necesaria y de Defensa en la Formalización de la Investigación Preparatoria.* Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego. Obtenido de <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/3449>
- Piñas, L., Viteri, C., & Hernandez, L. (2020). El derecho a la defensa técnica en las garantías jurisdiccionales en Ecuador. *Uniandes EPISTEME. Revista digital de Ciencia, Tecnología e Innovación*, VII(Especial), 1022-1033. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8298042.pdf>
- Ramírez, M. (2018). *La Necesidad del Ministerio Público en Formular Imputación Necesaria Desde el Inicio de la Investigación Preliminar.* Lima:

Universidad San Martín de Porres. Obtenido de
[https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/5700/ram
%C3%ADrez_cml.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/5700/ram%C3%ADrez_cml.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

Rodriguez, M., Ugaz, Á., Gamero, L., & Schönbohm, H. (2012). *Manual de la investigación preparatoria del proceso penal común*. Lima: AMBERO.

Obtenido de [https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/11/Manual-de-
la-investigaci%C3%B3n-preparatoria-del-proceso-com%C3%BAn-LP.pdf](https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/11/Manual-de-la-investigaci%C3%B3n-preparatoria-del-proceso-com%C3%BAn-LP.pdf)

Salas Beteta, C. (2011). La eficacia del proceso penal acusatorio en el Perú. *Prolegómenos Derecho y Valores*, 263-275.

Salas, C. (05 de Enero de 2019). Escuela de Derecho Juristas - Formalización de la Investigación Preparatoria. (I. escuela, Entrevistador)

San Martín, C. (2004). La privación de la libertad personal en el proceso penal y el derecho internacional de los derechos humanos. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, 611-633. Obtenido de
[https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a257139967ae39b3JmltdHM9MTY2NDIzNjgwMCZpZ3VpZD0zZDI4NWM0Yy01ODJkLTlyNDgtMjNiYS01MjAwNTkzOTYzMTQmaW5zaWQ9NTI1Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=3d2
85c4c-582d-6248-23ba-
520059396314&u=a1aHR0cHM6Ly9yZXZpc3Rhcy1jb2xhYm9yYWNpb24uanVyaWRpY2FzLn](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a257139967ae39b3JmltdHM9MTY2NDIzNjgwMCZpZ3VpZD0zZDI4NWM0Yy01ODJkLTlyNDgtMjNiYS01MjAwNTkzOTYzMTQmaW5zaWQ9NTI1Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=3d285c4c-582d-6248-23ba-520059396314&u=a1aHR0cHM6Ly9yZXZpc3Rhcy1jb2xhYm9yYWNpb24uanVyaWRpY2FzLn)

Sánchez, C. (2020). *La teoría del caso*. Bogotá: Defensoría del Pueblo. Obtenido de
[https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2020/03/doctrina4864
9.pdf](https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2020/03/doctrina48649.pdf)

- Valderrama, I. (julio-diciembre de 2016). El principio de congruencia en el proceso penal. *Revista virtual Via Inveniendi et Iudicandi*, XI(2), 159-180. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6126920.pdf>
- Vasconcelos Méndez, R. (2014). *Reforma procesal penal y Ministerio Público. Serie Juicios Orales*. México: Universidad Autónoma de México. Instituto de formación profesional de la procuraduría general de Justicia del distrito federal. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3680/15.pdf>
- Villavicencio, F. (2007). La imputación objetiva en la jurisprudencia peruana. *Revista de Derecho PUCP*, 253-279. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5085075.pdf>
- Zamora Acevedo, M. (2014). La búsqueda de la verdad en el proceso penal. *Acta Académica*(54), 147-186. Obtenido de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33626.pdf>